Naciones Unidas S/2018/292

Consejo de Seguridad

Distr. general
12 de abril de 2018
Español
Original: inglés

Carta de fecha 12 de abril de 2018 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur

Los miembros del Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur, cuyo mandato fue prorrogado en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad 2353 (2017), tienen el honor de transmitir adjunto a la presente el informe final del Grupo, presentado de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 2353 (2017).

El informe fue presentado el 14 de marzo de 2018 al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) relativa a Sudán del Sur, que lo examinó el 11 de abril de 2018.

El Grupo agradecería que la presente carta y el informe fuesen señalados a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y publicados como documento del Consejo.

(*Firmado*) Andrews **Atta-Asamoah**
Coordinador interino del Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur

(*Firmado*) Andrei **Kolmakov**
Experto

(*Firmado*) Anna **Oosterlinck**
Experta

(*Firmado*) Klem **Ryan**
Experto

(*Firmado*) Colin **Thomas-Jensen**
Experto

18-03977 (S) 160418 160418

Se ruega reciclar

Informe final del Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur

Resumen

Las pautas del conflicto antes señaladas al Consejo de Seguridad se han mantenido después del informe provisional del Grupo (S/2017/979), con terribles consecuencias humanitarias. Las facciones beligerantes, pero predominantemente fuerzas del gobierno, utilizan como tácticas de guerra las matanzas, la violación y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, el saqueo sistemático y la destrucción de medios de vida y de aldeas enteras. El conflicto por lo tanto, no se concentra entre las facciones beligerantes sino que adopta cada vez más la forma de una constante de ola de brutalidad contra civiles, que se ven obligados a abandonar sus hogares y sus fuentes de sustento.

En este contexto, el Presidente Salva Kiir sigue consolidando el poder en torno a sí mismo para autopreservarse y defender intereses políticos y económicos y está rodeado de un pequeño núcleo de partidarios de la línea dura en los que confía y que están en la cima de la adopción de decisiones en el país. El Vicepresidente Primero Taban Deng Gai se ha dedicado también a establecer una base de apoyo y lograr ventajas militares en zonas controladas por la facción de Riek Machar del Ejército de Liberación Popular del Sudán en la Oposición (SPLA-IO), con lo cual ha extendido la guerra a pesar del acuerdo de cesación de las hostilidades concertado con la mediación de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo.

Al mismo tiempo, tanto el Gobierno como los grupos de oposición entraban el acceso humanitario a poblaciones vulnerables en partes del país y siguen apropiándose de recursos de ayuda en medio de una situación económica cada vez peor. Las investigaciones del Grupo indican que fuerzas del Gobierno y del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (Machar) extraen y utilizan indebidamente recursos naturales en algunas partes del país para promover operaciones militares y, paralelamente, enriquecer a elites políticas y militares.

A pesar de los intentos de algunos grupos de oposición de unirse políticamente, siguen estando fragmentados desde el punto de vista operacional y tienen escasa capacidad para llevar a cabo operaciones militares. Con esta situación, el equilibrio de poder sigue favoreciendo al Gobierno, que sigue confiando cada vez más en una solución militar y no en un arreglo negociado del conflicto.

Las rivalidades entre alianzas e intereses regionales siguen redundando en desmedro de un consenso regional en pro de la paz en el Sudán del Sur, lo que allana el camino para que las partes beligerantes rechacen las gestiones de paz y mantengan su determinación de poner término militarmente al conflicto. Sin embargo, la falta de voluntad política por parte del Gobierno ha reducido cada vez más su credibilidad internacional, incluso en la región, en la que el Presidente Kiir depende para obtener apoyo de sus relaciones con el Presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y con Egipto.

A juicio del Grupo, habida cuenta de la falta de voluntad política para llevar a cabo las actuales gestiones de paz y de que la región y la comunidad internacional no ejercen una fuerte presión, la situación en el país seguirá deteriorándose con enormes consecuencias humanitarias y para la seguridad de la región.

Índice

		Página
I.	Antecedentes	4
	A. Mandato y nombramiento	4
	B. Metodología	4
	C. Cooperación con organizaciones internacionales y otros interesados	5
II.	Resumen del conflicto	5
III.	Obstáculos a la paz y a los intentos de reconciliación	7
	A. Relaciones de poder en el Gobierno de Transición de Unidad Nacional	7
	B. Fragmentación del escenario militar y político	10
	C. Las rivalidades étnicas se agravan	11
	D. Aumento de las tensiones dentro de la región	11
IV.	Transgresiones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos	13
	A. Ataques contra civiles en función de su tribu	14
	B. Vulneración de los derechos del niño	16
	C. Obstrucción de las misiones humanitarias y ataques contra trabajadores humanitarios	18
V.	Fuentes de fondos	24
	A. Ingresos derivados del petróleo	24
	B. Ingresos de la madera utilizados para financiar a grupos armados	25
	C. Extorsiones a personal de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur	26
VI.	Armas	27
VII.	Cumplimiento de la congelación de activos y la prohibición de viaje	33
VIII.	Conclusión	35
IX.	Recomendaciones	35
Anexos*		
I.	Table of correspondence	37
II.	Conflict-related sexual violence	38
III.	Response of First Vice-President Taban Deng Gai regarding recruitment of children by the Sudan People's Liberation Army in Opposition (Taban)	40
IV.	Obstruction of humanitarian access	41
V.	Case study: Taxation at checkpoints	43
VI.	Case Study: Loka plantation	45
VII.	Letters to the Permanent Representative of China to the United Nations	48

* Los anexos se distribuyen en el idioma en que fueron presentados únicamente y sin haber sido objeto de revisión editorial.

I. Antecedentes

A. Mandato y nombramiento

1. En su resolución 2206 (2015), el Consejo de Seguridad estableció un régimen de sanciones que se aplicarían a las personas y entidades designadas por contribuir al conflicto de Sudán del Sur y un comité de sanciones (Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) relativa a Sudán del Sur). El 1 de julio de 2015, el Comité designó a seis personas para aplicarles sanciones selectivas. El Consejo aprobó el 24 de mayo de 2017 la resolución 2353 (2017), por la cual el régimen de sanciones se prorrogó hasta el 31 de mayo de 2018.

2. Al establecer el régimen de sanciones, el Consejo de Seguridad decidió que las medidas incluidas en él, que consistían en la prohibición de viajar y la congelación de activos, se aplicarían a las personas o entidades designadas por el Comité que fueran responsables o cómplices de actos o políticas que entrañasen una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilización de Sudán del Sur o hubiesen participado, de manera directa o indirecta, en ellos.

3. El Consejo de Seguridad también estableció un grupo de expertos (Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur) para que suministrara información e hiciera análisis con respecto a la aplicación de la resolución, lo que incluye información pertinente a la posible designación de personas e información relativa al suministro, la venta o la transferencia de armas, materiales conexos y asistencia militar o de otra índole, entre otros medios a través de las redes de tráfico ilícito, a personas o entidades que socavaran los procesos políticos o cometieran contravenciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. El Consejo, en la resolución 2353 (2017), prorrogó el mandato del Grupo hasta el 30 de junio de 2018.

4. El 11 de julio de 2017, el Secretario General, en consulta con el Comité, nombró a los cinco miembros del Grupo de Expertos (véase S/2017/594): un experto en cuestiones regionales (Andrews Atta-Asamoah), un experto en recursos naturales y finanzas (Andrei Kolmakov), una experta en asuntos humanitarios (Anna Oosterlinck), un coordinador y experto en armas (Klem Ryan) y un experto en grupos armados (Colin Thomas-Jensen). El 16 de febrero de 2018, la Secretaría informó al Comité de que el Sr. Ryan había dimitido con efecto a partir del 15 de febrero de 2018 como Coordinador del Grupo de Expertos, si bien seguiría formando parte del Grupo en calidad de experto en armas durante la vigencia del mandato (hasta el 30 de junio de 2018).

5. Después del informe provisional del Grupo de fecha 20 de noviembre de 2017 (S/2017/979), sus miembros han viajado a Bélgica, los Estados Unidos de América, Etiopía, Italia, Kenya, los Países Bajos, Sudán del Sur y Uganda.

B. Metodología

6. El presente informe fue preparado sobre la base de investigaciones y entrevistas realizadas por el Grupo entre octubre de 2017 y febrero de 2018, así como de un examen de documentos publicados por el Gobierno de Sudán del Sur, entidades regionales, como la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la Unión Africana, y organizaciones internacionales que trabajan en temas relacionados con Sudán del Sur. El informe también se basa en la labor realizada anteriormente por el Grupo, con inclusión de informes anteriores, tanto públicos como confidenciales, al Consejo de Seguridad, cientos de entrevistas y una gran cantidad de información y pruebas aportadas por fuentes muy diversas.

7. El Grupo cumple las normas recomendadas por el grupo de trabajo oficioso del Consejo de Seguridad sobre cuestiones generales relativas a las sanciones en su informe de diciembre de 2006 (S/2006/997). Esas normas exigen fundarse en documentos genuinos verificados, pruebas concretas y observaciones in situ por expertos, con inclusión de fotografías siempre que sea posible. El Grupo ha corroborado toda la información contenida en el presente documento con ayuda de múltiples fuentes independientes a fin de conformarse a la norma probatoria apropiada.

8. El Grupo de Expertos ha llevado a cabo su labor con la mayor transparencia posible, consciente a la vez de la necesidad de proteger la confidencialidad cuando fuera necesario. El hecho de que una fuente se califique de "confidencial" o no se mencione expresamente en el presente informe significa que el Grupo ha determinado que revelar su identidad significaría un peligro digno de crédito para su seguridad. La fuente confidencial militar calificada de oficial o comandante "superior" tiene un rango comprendido entre los de teniente coronel y general de brigada. La fuente militar confidencial calificada de oficial o comandante de "alto rango" tiene el rango de general de división o más alto. Un documento se califica de confidencial cuando su divulgación podría poner en peligro la seguridad de la fuente o comprometer de otro modo investigaciones que esté realizando el Grupo.

9. El Grupo, para reunir, examinar y analizar información relativa al suministro, la venta o la transferencia de armas y materiales conexos de conformidad con la resolución 2353 (2017), ha utilizado una combinación de inspecciones de armas y equipo, fotografías, otras pruebas visuales, la evaluación de documentos y entrevistas con fuentes directas. Al no haber un embargo de armas, no fue posible efectuar inspecciones formales de las existencias de ellas.

C. Cooperación con organizaciones internacionales y otros interesados

10. El Grupo de Expertos, si bien actúa de manera independiente de organismos e instituciones de las Naciones Unidas, querría en todo caso expresar su reconocimiento a los altos cargos y al personal de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), la Oficina del Enviado Especial del Secretario General para el Sudán y Sudán del Sur y a otros funcionarios de las Naciones Unidas en Addis Abeba, Kampala y Nairobi por su inestimable apoyo.

11. Desde el comienzo de su mandato, el Grupo ha enviado 30 comunicaciones oficiales a 22 Estados, organizaciones y otras entidades y ha recibido 11 respuestas con la información solicitada (véase el anexo I del presente informe).

II. Resumen del conflicto

12. Después del informe provisional del Grupo de 20 de noviembre de 2017 (S/2017/979), se han mantenido en numerosas partes de Sudán del Sur las pautas del conflicto que ya se habían señalado al Consejo de Seguridad, a pesar de una renovada intervención regional que culminó con la firma en Addis Abeba, el 21 de diciembre de 2017, del Acuerdo sobre Cesación de las Hostilidades, Protección de los Civiles y Acceso Humanitario[1].

[1] El texto del Acuerdo se puede consultar en https://igad.int/attachments/article/1731/1712%2021%20Signed%20CoH%20Agreement.pdf, consultado el 9 de marzo de 2018.

13. El conflicto en Sudán del Sur es descrito con cada vez mayor frecuencia como una de las peores crisis humanitarias del mundo y tiene como causa más importante el empleo continuo de la violencia por todas las partes beligerantes. La extrema violencia ha recaído en su mayor parte sobre la población civil de los estados de la gran Ecuatoria, el Alto Nilo, Jonglei e Unidad y la parte occidental de Bahr el-Ghazal por motivos, principalmente, de origen étnico o de un supuesto apoyo a grupos de oposición. Las facciones beligerantes, pero predominantemente las fuerzas de gobierno, recurren a la matanzas, la violación y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado de personas, el saqueo sistemático y la destrucción de aldeas y medios de vida como tácticas típicas de combate en esa zona. En consecuencia, el conflicto adopta cada vez más la forma de una ola continua de brutalidad cuya víctima es la población civil y no la de un simple enfrentamiento entre grupos armados.

14. Las dimensiones intraétnicas del conflicto se han agravado tras la ruptura que tuvo lugar en mayo de 2017 entre el Presidente Kiir y el General Paul Malong Awan y la tentativa del Vicepresidente Primero Taban Deng de ampliar su base de apoyo en el grupo étnico nuer, con lo cual algunas comunidades se han dividido entre él y Riek Machar. La tensión entre Kiir y Malong ha contribuido en particular a que se profundizaran las divisiones existentes dentro de las comunidades warrap, aweil y bor dinka y reducido considerablemente parte de la base militar y étnica del Presidente en esas comunidades.

15. En medio de la terrible situación en el país, el Presidente Kiir sigue consolidando su poder. En ese proceso se ha rodeado de un pequeño núcleo de gente que está en la cima de la adopción de decisiones en el país (véase el párr. 20 *infra*).

16. Representantes del gobierno y de grupos de oposición entraban el acceso humanitario a poblaciones vulnerables de partes del país y tratan además de apropiarse de recursos de ayuda en medio de una crisis económica cada vez mayor. El Grupo, mediante extensas entrevistas con múltiples fuentes independientes con conocimiento directo de la situación, complementadas con un minucioso estudio de los documentos disponibles, detalla en el presente informe diversas estrategias y medios de obstruir el acceso humanitario con casos concretos. El Grupo se refiere también a la explotación de la teca y a la tributación ilícita en pro del esfuerzo de guerra.

17. Los grupos de oposición siguen teniendo limitados suministros militares, lo cual mantiene el equilibrio de poder en favor del Gobierno, que sigue creyendo cada vez más en una solución militar y no en un arreglo negociado del conflicto. El mando y control de los grupos de oposición sigue estando principalmente en manos de altos dirigentes de cuyas decisiones y cuya política dependen la índole y la orientación del conflicto.

III. Obstáculos a la paz y a los intentos de reconciliación

A. Relaciones de poder en el Gobierno de Transición de Unidad Nacional

18. En ausencia de Riek Machar, el escenario político en Sudán del Sur sigue dominado por el Presidente Salva Kiir y el Vicepresidente Primero Taban Deng Gai. El poder compartido entre los dos líderes es la piedra angular del Gobierno de Transición de Unidad Nacional y la participación de los demás en el actual escenario político es marginal. Sin embargo, la relación entre los dos líderes se ha convertido en una alianza de conveniencia, cimentada en el intento de proteger sus intereses económicos y en su propósito político común de impedir que Machar sea parte en el acuerdo de paz y, con ello, mantener el actual statu quo político[2].

19. A partir de octubre de 2017, cuando surgieron discrepancias entre las partes en el Gobierno de Transición de Unidad Nacional acerca de las modalidades de las consultas previas al foro de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (véanse más detalles en S/2017/979, secc. III.A), se ha profundizado la desconfianza entre las partes[3]. En el Gobierno de Transición se ha ido apartando y dejando cada vez más de lado a representantes del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán/Ex Detenidos con la intención de limitar su capacidad para desempeñar sus funciones, mientras que Taban Deng Gai es objeto de una fuerte presión para demostrar que es necesario en el arreglo de poder compartido y demostrar su lealtad al Presidente Kiir[4].

20. El Presidente Kiir, para seguir afianzando su control del gobierno, se deshace de quienes considera una amenaza para su permanencia en el poder[5]. En ese proceso se ha rodeado de un pequeño núcleo de gente que está en la cima de la adopción de decisiones en el país, como el Teniente General Akol Koor Kuc del Servicio de Seguridad Nacional, y políticos partidarios de una línea dura, como el Ministro de Asuntos del Gabinete, Martin Elia Lomuro, el Ministro de Información, Michael Makwei, y otros cuyos intereses políticos y económicos están profundamente ligados a la economía de guerra imperante. Ex aliados del Presidente Kiir, como el General Paul Malong Awan, ex Jefe de Estado Mayor del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán, han perdido en las pugnas de poder ante aliados más cercanos, como Akol Koor Kuc, Director de Seguridad Nacional. La consolidación del poder tiene como

[2] Entrevistas con fuentes confidenciales de las Naciones Unidas en Juba, con múltiples altos cargos políticos de Sudán del Sur en Nairobi y con múltiples políticos de Sudán del Sur en Kampala, enero de 2018.

[3] Según se citaba en el periódico en árabe *Al-Maugif*, el Ministro de Información, Michael Makwei, había manifestado en una entrevista que el Gobierno quería que el Ministro de Relaciones Exteriores Deng Alor, representante del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán/ex detenidos en el Gobierno (SPLM-FD) dimitiera porque habría hecho campaña en contra del Gobierno. Véase Radio Tamazuj, Government wants foreign minister Deng Alor to resign, 19 de febrero de 2018. Se puede consultar en https://radiotamazuj.org/en/news/article/government-wants-foreign-minister-deng-alor-to-resign, consultado el 2 de marzo de 2018.

[4] Entrevistas con fuentes confidenciales de las Naciones Unidas en Juba, con múltiples altos cargos políticos de Sudán del Sur en Nairobi y con múltiples políticos de Sudán del Sur en Kampala, enero de 2018.

[5] El General Paul Malong Awan y aliados suyos como Tilar Ring Deng, Embajador de Sudán del Sur ante la Federación de Rusia, y el Gobernador del estado de los Lagos del Este, Philip Wutchok Bor, han sido removidos de sus cargos. Otros que han perdido su puesto recientemente son el Jefe Auxiliar de las Fuerzas de Defensa para Operaciones, Teniente General Marial Chanuong, sobre el cual pesan sanciones, el Ministro de Hacienda, Stephen Dhieu, y los gobernadores de varios estados. El Presidente Kiir remueve del cargo a miembros del gobierno mediante decretos ejecutivos.

base el intento de mantener por un tiempo el statu quo y hacer posible que quienes ocupan los más altos cargos del gobierno conserven sus intereses económicos y políticos durante el mayor tiempo posible[6].

21. El distanciamiento entre el Presidente Kiir y el General Malong ha reducido las posibilidades del Gobierno de movilizar milicias étnicas de la zona de Aweil en la parte meridional de Bahr el Ghazal, donde se encuentra principalmente la base de apoyo de Malong, y ha reducido también parte de la base étnica y militar de poder del Presidente. Por más que el General Malong siga en el exilio, la tensión entre los dos influyentes dinkas ha profundizado el distanciamiento entre los aweil y los warrap dinka. Los dinka partidarios de Malong en Aweil se oponen al Presidente y creen que su salida en la única forma de que su grupo étnico preserve su base de poder en el país[7].

22. El Presidente Kiir sigue creyendo que Machar es una amenaza para su permanencia en el poder, tal como Taban considera que el regreso de Machar pone en peligro su papel en el gobierno. El consiguiente interés mutuo en aislar a Machar ha hecho que los dos líderes se opongan a cualquier posibilidad de darle participación en cualquier acuerdo de paz. La postura del Gobierno y del Vicepresidente Primero Taban Deng contraria a Machar ha creado en algunas partes interesadas en el proceso de paz la impresión de que, si la comunidad internacional insiste en el retorno de Riek Machar, el Gobierno y el Vicepresidente Primero dejarían de colaborar en las gestiones internacionales[8].

23. La relación entre el Gobierno y los mecanismos internacionales de supervisión, así como la relación del Gobierno con Estados clave en la región y con grandes donantes (en particular los Estados Unidos) se ha deteriorado considerablemente. En su relación con la comunidad internacional, el Gobierno considera que cualquier intento de ponerse en contacto con la oposición o de imponer medidas punitivas (como la declaración de embargo unilateral de armas formulada por los Estados Unidos el 12 de febrero de 2018[9]) redunda en desmedro de su legitimidad. En un intento de justificar sus afirmaciones de parcialidad en el extranjero, los miembros del Gobierno exageran las discrepancias de menor importancia con asociados internacionales y con mecanismos regionales de supervisión. En consecuencia, los partidarios de la línea dura en el gobierno hacen cada vez más propaganda contra las gestiones y los mecanismos de supervisión internacionales, en particular la Comisión Mixta de Supervisión y Evaluación, el Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad y la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur[10].

24. A la vanguardia del mecanismo de propaganda del gobierno se encuentran asociados fundamentales del Presidente como Martin Elia Lomuro, que tiene doble ciudadanía del Reino Unido y Sudán del Sur y desempeña actualmente el cargo de Ministro de Asuntos del Gabinete. En la primera ronda del foro de alto nivel para la revitalización, Lomuro trató de desacreditar el proceso aduciendo que el Gobierno no estaba de acuerdo con el informe sobre la consulta previa que servía de base para el

[6] Entrevistas con fuentes confidenciales de las Naciones Unidas en Juba, con altos cargos políticos de Sudán del Sur en Nairobi y con políticos de Sudán del Sur en Kampala, enero de 2018.

[7] Entrevistas con cuatro altos cargos políticos de Sudán del Sur y dos jóvenes activistas dinka en Nairobi, 15 a 17 de enero de 2018.

[8] Entrevista confidencial con un alto representante del cuerpo diplomático en Juba, enero de 2018.

[9] US Arms Restrictions on South Sudan, https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/02/277849.htm, consultado el 9 de marzo de 2018.

[10] Entrevistas con dos exfuncionarios del gobierno en Nairobi y una fuente confidencial en un alto cargo en Juba, enero de 2018.

foro. Tras fracasar en su intento insistió en fijar lo que consideraba límites, esto es, temas concretos que no se podían discutir. Su postura inflexible hizo difícil que el foro cumpliera sus objetivos[11]. Michael Makwei, Ministro de Información, ha estado a la cabeza de los intentos del gobierno de limitar la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa[12]. En la misma categoría se encuentra Akol Koor Kuc, jefe del Servicio de Seguridad Nacional, cuya organización es responsable de diversas atrocidades y de actos para obstruir el acceso humanitario en todo el país[13].

25. El Vicepresidente Primero Taban, por su parte, se ha concentrado en lograr ventajas militares en zonas controladas por el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (entre ellas Panijar, Akobo y Pagak) y en reducir la influencia política de Riek Machar sosteniendo que el ex Vicepresidente Primero no puede trabajar con el Presidente Kiir y, por lo tanto, no debería regresar al Gobierno de Transición[14]. Con ese fin, el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición ha socavado el acuerdo vigente de cesación de las hostilidades y extendido la guerra en zonas dominadas por la oposición. A pesar de la firma, el 21 de diciembre de 2017, de ese acuerdo, Taban ordenó el desplazamiento de tropas a zonas del norte de Jonglei el 3 de enero de 2018[15] en un intento de demostrar poderío militar y político en la etapa previa a la segunda ronda del foro de alto nivel para la revitalización que tendría lugar en Addis Abeba[16]. Ese acto contravenía tanto el espíritu como la letra del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades firmado menos de un mes antes.

26. Las medidas tomadas por Taban han aumentado gradualmente su influencia política y militar en partes del país, pero su base de apoyo no ha mejorado sus perspectivas de reducir la influencia de Machar en la política del país y entre el grupo étnico nuer[17]. El hecho de que Taban haya comprado su base y necesite recursos para mantenerla constituye otra explicación de la función que desempeña en la economía de guerra imperante[18]. Esas medidas tampoco han sido suficientes para que lo vean con buenos ojos los partidarios de la línea dura en el gobierno, que siguen desconfiando de sus actos y sus intenciones[19]. A pesar de la idea generalizada en los grupos de oposición de que Taban es utilizado por el Presidente Kiir, el Vicepresidente Primero evidentemente aprovecha también la situación para asegurarse un lugar en el escenario político, enriquecerse y promoverse como alguien capaz de cumplir la promesa de combatir la oposición[20].

---

[11] Entrevistas con múltiples participantes en el foro de alto nivel, Nairobi y Kampala, enero de 2018.

[12] Para una descripción detallada de la represión de la libertad de expresión en todo el país, véase UNMISS, Report on the right to freedom of opinion and expression in South Sudan since the July 2016 crisis (febrero de 2018). Se puede consultar en https://unmiss.unmissions.org/sites/default/files/unmiss-ohchr_freedom_of_expression_report_-_final_amendment_26_feb_2018.pdf.

[13] Entrevistas con múltiples fuentes confidenciales en Juba y Nairobi, enero de 2018.

[14] Entrevistas con múltiples participantes en el foro de alto nivel y con un alto cargo político de Sudán del Sur alineado con el gobierno, Nairobi, enero de 2018.

[15] Véase el comunicado de prensa del Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad, 17 de enero de 2018. Se puede consultar en http://ctsamm.org/wp-content/uploads/2018/01/CTSAMM-Press-Release-_January-17-2018.pdf.

[16] Entrevistas con fuentes confidenciales en Juba, 24 de enero de 2018.

[17] Entrevistas con fuentes confidenciales de las Naciones Unidas en Juba y con un alto cargo político de Sudán del Sur alineado con el gobierno, Nairobi, 20 de enero de 2018.

[18] Entrevistas con fuentes de Sudán del Sur en Nairobi y Kampala, noviembre de 2017 y enero de 2018.

[19] Entrevistas con altas fuentes de Sudán del Sur en Nairobi, enero de 2018.

[20] Entrevista con una fuente confidencial de las Naciones Unidas en Juba y con un alto cargo político de Sudán del Sur en Nairobi, enero de 2018.

B. Fragmentación del escenario militar y político

27. La continua fragmentación del escenario militar y político en Sudán del Sur queda de manifiesto en la proliferación de grupos de oposición. Hasta los recientes intentos de algunas de las partes por formar una alianza, que culminó en marzo de 2018 en la formación de la Alianza de Oposición de Sudán del Sur, la falta de un mando operacional unificado había generado competencia entre esos grupos para aprovechar parte de la influencia política y militar del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (Machar). En partes de la Gran Ecuatoria, el Frente de Salvación Nacional, encabezado por el General Thomas Cirillo, ha sufrido grandes bajas en enfrentamientos con el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán y con fuerzas de Machar y, a pesar de las defecciones en el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición de oficiales de alto rango, el Frente de Salvación Nacional tiene una reducida presencia militar sobre el terreno.

28. Algunos grupos de oposición entrevistados por el Grupo manifestaron que no podían unirse por culpa de la negativa de Machar a considerar opciones para sumar a otros a su bando o a ceder y sumarse a otros bandos. Sostienen que la única vez en que Machar aceptó alinearse con los grupos de oposición en la primera ronda del foro de alto nivel para la revitalización en Addis Abeba, por ejemplo, fue cuando los demás grupos pidieron colectivamente que fuera puesto en libertad en Sudáfrica para que pudiera participar en las negociaciones. El exgobernador de Ecuatoria Occidental, Joseph Bakosoro, declaró al Grupo que “Machar siempre quiere que los demás se unan a él. No considera posibilidad alguna que le haga contemporizar para formar un frente unido de oposición”[21]. En todo caso, la falta de recursos para mantener sus operaciones separadas contra el Gobierno ha debilitado a los grupos de oposición y mantenido en gran medida el equilibrio de poder en favor del Gobierno[22]. Los avances logrados por el Gobierno, a su vez, le han hecho creer cada vez más en una victoria militar sobre la oposición[23].

29. El grupo de Machar sigue considerando que el regreso de su líder de Sudáfrica constituye un elemento clave para sus decisiones y para su participación en los procesos regionales, como se indicó en el informe provisional del Grupo de 20 de noviembre de 2017 (S/2017/979). En la primera ronda del foro de alto nivel para la revitalización, sus representantes querían subordinar la firma del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades a que su líder quedara en libertad[24]. Representantes del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (Machar) que hablaron con el Grupo interpretaban la ausencia de su líder como señal de que la región no estaba aún empeñada en lograr la paz a pesar del foro[25]. No se ha tomado una decisión a nivel regional acerca del regreso de Machar a pesar de que otros grupos de oposición lo están exigiendo[26].

---

[21] Entrevista con Joseph Bakosoro en Kampala, enero de 2018.

[22] Entrevista con fuentes confidenciales de las Naciones Unidas, Juba, enero de 2018.

[23] Entrevistas con múltiples políticos de Sudán del Sur y con un alto representante del cuerpo diplomático, Juba y Nairobi, enero de 2018.

[24] Entrevistas con tres políticos de Sudán del Sur en Nairobi, enero de 2018.

[25] Entrevista con múltiples dirigentes del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición en Kampala, 2 de enero de 2018.

[26] En un comunicado de fecha 26 de marzo de 2018, el Consejo de Ministros de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo anunció la decisión de poner término al arresto domiciliario de Riek Machar en Sudáfrica. Véase https://reliefweb.int/report/south-sudan/communiqu-61st-extra-ordinary-session-igad-council-ministers-situation-south.

C. Las rivalidades étnicas se agravan

30. El origen étnico sigue siendo el primer instrumento de movilización para las partes beligerantes en Sudán del Sur y, por ello, la dimensión étnica del conflicto no ha variado desde el informe provisional del Grupo. La tensión entre los dinka y los nuer que ha avivado el conflicto desde el principio sigue siendo tan alta como antes, especialmente en razón de las ideas que circulan acerca de la ausencia de Machar del país. Las tensiones entre otras tribus y los dinka, en particular en los estados de Ecuatoria, se han mantenido igualmente altas.

31. Las divisiones internas se han agravado en particular en los grupos étnicos nuer y dinka. En el caso de los nuer, la separación cada vez mayor entre Riek Machar y el Vicepresidente Primero Taban Deng sigue polarizando algunas comunidades, en particular los lou nuer en el estado de Jonglei. Las divisiones entre diversas comunidades dinka y entre ellas se están profundizando aún más como resultado de la tensión existente entre el Presidente Salva Kiir y el ex Jefe de Estado Mayor Paul Malong. El General Malong fue removido del cargo en mayo de 2017 y estuvo sometido a arresto domiciliario en Juba durante siete meses antes de que se autorizara que viajara a Kenya en noviembre de 2017. Los seguidores de Malong, entre ellos el Embajador ante la Federación de Rusia, Tilar Ring Deng, fueron posteriormente removidos de sus cargos en el Gobierno en razón de su asociación con el ex Jefe de Estado Mayor[27].

32. Desde el comienzo del conflicto, los dinka se han movilizado en torno a su hegemonía y el control del poder. Sin embargo, el hecho de que el Presidente Kiir concentrara el poder en sí mismo, la falta de recursos para sufragar las redes de clientela étnica que existen y la remoción del cargo de miembros tales como Malong han afectado a la cohesión interna[28]. Las divisiones que existen en las comunidades bor, aweil y warrap dinka se han profundizado. El daño que puede causar una división en las relaciones dentro del grupo étnico dinka ha hecho que algunos altos cargos del Consejo de Ancianos Jieng traten de impedir que la situación se agrave.

D. Aumento de las tensiones dentro de la región

33. El Sudán del Sur se encuentra en el centro de diversas tensiones regionales que surten enormes efectos en sus relaciones bilaterales y en la participación de la región en los asuntos del país. En primer lugar, hay que mencionar los intentos de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita por encontrar aliados militares en el Mar Rojo para hacer frente a la crisis en el Golfo con respecto a Qatar y al conflicto en el Yemen[29]. Las alianzas que se van formando han repercutido negativamente en las relaciones bilaterales entre ciertos países del Cuerno de África, como el Sudán y Egipto por ejemplo. Las tensiones existentes entre los dos países han aumentado a raíz de la controversia relativa al triángulo de Hala'ib, la influencia turca en la isla Suakin y las diferencias en cuanto a la política respecto de la Hermandad Musulmana[30]. El mejoramiento de las relaciones entre Eritrea y Egipto y la impresión

[27] Entrevistas con un ex general del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán y con dos altos cargos políticos en Nairobi, enero de 2018.

[28] Entrevista con altos cargos políticos de Sudán del Sur, 20 de enero de 2018.

[29] Véase por ejemplo, *Africa Confidential*: "Rival Arab powers take their fight to Africa" (9 de febrero de 2018). Se puede consultar en https://www.africa-confidential.com/article/id/12234/Rival_Arab_powers_take_their_fight_to_Africa -.

[30] La tensión entre los dos países quedó de manifiesto cuando el Sudán, en carta enviada a las Naciones Unidas en diciembre de 2017, presentó una protesta por la declaración de soberanía sobre Hala'ib formulada por Egipto y llamó a su Embajador en Egipto para celebrar consultas en enero de 2018.

resultante de que Eritrea significa una amenaza tanto para el Sudán como para Etiopía han contribuido a las tensiones entre el Sudán y Eritrea. En diciembre de 2017, el Sudán declaró un estado de emergencia de seis meses de duración en las zonas limítrofes con Eritrea (las regiones de Kodofan del norte y Kassala) y aumentó el número de sus tropas en esas zonas después de que se publicarán informes acerca de la presencia de un contingente egipcio en la base de Sawa en Eritrea en enero de 2018[31].

34. La segunda fuente de tensión dimana de la construcción de la Gran Presa para el Renacimiento de Etiopía. Tras una reunión tripartita celebrada entre Egipto, Etiopía y el Sudán en forma paralela a la cumbre de la Unión Africana que tuvo lugar en enero de 2018, los tres países declararon que no tenían más diferencias respecto del proyecto[32]. A pesar de esas seguridades persisten las tensiones entre Etiopía y Egipto, como se mencionaba en el informe provisional del Grupo (S/2017/979), así como la preocupación de Etiopía acerca de la posibilidad de que Eritrea cometa un acto de sabotaje en la presa. Las rivalidades respecto de la presa han polarizado las alianzas regionales y Egipto, Uganda, Eritrea y Sudán del Sur colaboran cada vez más por un lado mientras que Etiopía y el Sudán lo hacen por el otro[33].

35. También reviste importancia la competencia regional entre Etiopía, Kenya y Uganda para ejercer influencia en Sudán del Sur como medio de salvaguardar sus respectivos intereses nacionales. Las tensiones a que da lugar esta competencia constituyen la base de la falta de un consenso regional acerca de la crisis en Sudán del Sur y de la rivalidad entre los procesos regionales.

36. En medio de estas tensiones cada vez mayores, Sudán del Sur se ha convertido en el escenario de una competencia regional en la que diversos países tratan de ejercer influencia en el statu quo en Juba en pro de sus respectivos intereses nacionales[34]. Uganda ha apoyado al Gobierno de Salva Kiir y ha promovido los intentos de reunificar al Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán como medio de avanzar hacia la celebración de elecciones en Sudán del Sur[35]. El Sudán y Etiopía han seguido promoviendo el foro de alto nivel para la revitalización. Egipto ha aumentado sus actividades en la región, especialmente en Sudán del Sur, lo que refleja su intento de Egipto de preservar sus intereses de larga data en torno al Nilo y la tensión que existe con Etiopía respecto de la construcción de la Gran Presa.

37. Egipto ve una oportunidad de debilitar la influencia de los intereses de larga data de Etiopía en Sudán del Sur y ha encontrado un socio muy dispuesto en el Presidente Museveni de Uganda, que considera a Etiopía un rival político en la

[31] Al Jazeera informó inicialmente acerca de las denuncias de la presencia de un contingente egipcio en Eritrea el 2 de enero de 2018 y, luego, el 4 de ese mes lo hizo el Middle East Monitor. Véase https://www.middleeastmonitor.com/20180104-uae-backed-egyptian-forces-arrive-in-eritrea/, consultado el 21 de enero de 2018.

[32] Se informó de que, en una conferencia de prensa que había tenido lugar después de la reunión, el Presidente de Egipto, Abdel Fatah al-Sisi, había declarado “no hay crisis”. Véase www.egypttoday.com/Article/1/41352/Sisi-re-assures-after-GERD-summit-No-country-will-be, consultado el 2 de febrero de 2018, y www.egyptindependent.com/no-crisis-between-egypt-sudan-and-ethiopia-sisi/, consultado el 2 de febrero de 2018.

[33] Las relaciones militares entre Etiopía y el Sudán se han estrechado, al igual que la relación entre Eritrea y Egipto. El Jefe de Estado Mayor de Etiopía, visitó Jartum en agosto de 2017 y el Teniente General Emad al-Din Mustafa Adawi, Jefe de Estado Mayor del Sudán visitó Addis Abeba en enero de 2018, unos días después del cierre de la frontera entre Etiopía y Eritrea. El Presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, hizo también una visita de dos días de duración a El Cairo en enero de 2018 en el curso de la cual se discutieron las relaciones bilaterales y los acontecimientos en la cuenca del Nilo.

[34] Para un examen de los diversos intereses nacionales, véase el informe provisional del Grupo (S/2017/979).

[35] Sudán del Sur y Egipto firmaron en marzo de 2018 un memorando de entendimiento para establecer un mecanismo de consulta política entre los dos países.

influencia regional[36]. En noviembre de 2017, Egipto y Uganda trasladaron de Kampala a El Cairo el proceso de reunificación del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán y facilitaron conjuntamente una reunión en Uganda entre el Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán/Ex Detenidos y el Gobierno de Sudán del Sur. De esa manera, Egipto y Uganda debilitaron el foro de alto nivel para la revitalización dirigido por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, proceso que ambos países consideran que es impulsado por Etiopía[37]. Sudán del Sur ocupa también un lugar importante en la búsqueda por Egipto de fuentes alternativas de agua que incluyen la posible construcción del canal de Jonglei, que aumentará la corriente de agua hacia el Nilo. La iniciativa de Sudán del Sur de acercarse a la Liga de los Estados Árabes es un indicio de la influencia cada vez mayor que ejerce Egipto en ese país y de su función de asociado regional político y de seguridad. Sudán del Sur, de ingresar en la Liga de los Estados Árabes, será el único Estado sin mayoría musulmana en la organización.

38. Los problemas internos que se van planteando en cada uno de los países de la región complican también sus intentos de tener una participación importante en Sudán del Sur y facilitan la extensión de la crisis de este país en la región. Kenya, por ejemplo, se concentra en sus asuntos internos y, salvo facilitar la reunión de grupos de oposición en Nyahururu con el objetivo de ayudarles a llegar a una postura común, no ha encabezado ninguna iniciativa importante de paz ni ha tenido una participación activa en los procesos regionales relativos a Sudán del Sur[38]. Habida cuenta del papel de vanguardia que desempeña Etiopía en la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, los problemas internos que experimenta y la dimisión en febrero de 2018 del Primer Ministro Hailemariam Desaleign constituyen acontecimientos importantes que han de incidir en la dirección que tomarán sus relaciones bilaterales con el Sudán del Sur, así como en la participación general de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en Sudán del Sur.

IV. Transgresiones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos

39. El Grupo, sobre la base de entrevistas con víctimas, testigos y múltiples fuentes independientes con conocimiento directo de la situación, complementadas con un minucioso examen de documentos, llega a la conclusión de que, desde la publicación de su informe provisional (S/2017/979), han persistido con una impunidad prácticamente absoluta las transgresiones en gran escala de las disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Con arreglo al derecho internacional, recae sobre el Gobierno la responsabilidad primaria de proteger a su población civil de vulneraciones de los derechos humanos y de hacer que se rinda cuentas de los abusos cometidos. Sin embargo, son fuerzas de seguridad del Gobierno las responsables de la enorme mayoría de estas vulneraciones y, por lo tanto, son ellas las que representan el mayor peligro para la población que están obligadas a proteger. Las autoridades del país no han disuadido a los autores de estos actos ni a quienes tienen responsabilidad de mando, ni tampoco los han castigado, con lo que contribuyen a un ciclo de impunidad que lleva a otras atrocidades, cada vez más crueles, contra civiles[39].

[36] Entrevista confidencial con un alto funcionario de Uganda, Kampala, febrero de 2018.

[37] Entrevista con múltiples políticos de Sudán del Sur, Nairobi, enero de 2018.

[38] Entrevista confidencial con una fuente del Gobierno de Kenya y con múltiples líderes de grupos de oposición de Sudán del Sur, Nairobi, noviembre de 2017 y enero de 2018.

[39] Según fuentes confidenciales de las Naciones Unidas, el Gobierno no ha logrado prácticamente progreso alguno en la investigación de las personas y los comandantes responsables de abusos

40. Las transgresiones del derecho internacional aplicable que han tenido lugar en Sudán del Sur incluyen matanzas extrajudiciales, tortura, detención y reclusión arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones a la libertad de prensa, vulneraciones del derecho de libertad de expresión y reunión, desplazamiento forzado de civiles, ataques contra trabajadores humanitarios y obstrucción de la asistencia humanitaria, restricciones a la libertad de desplazamiento, hostigamiento e intimidación para hacer cundir el temor, palizas y otras formas de malos tratos, instigación a la violencia y saqueo y destrucción de medios de sustento, viviendas, hospitales y escuelas. A juicio del Grupo, todas las partes han ejercido violencia sexual relacionada con el conflicto, con inclusión de la violación y la violación colectiva, como tácticas de guerra y este tipo de violencia sigue caracterizando el conflicto (véase el anexo II del presente informe). También continúan cometiéndose graves infracciones contra los niños, entre ellas su reclutamiento y utilización en el conflicto[40].

A. Ataques contra civiles en función de su tribu

41. Los civiles que no participan activamente en las hostilidades siguen siendo atacados deliberadamente, como parte de operaciones militares, en función de su afiliación tribal o política. Al final de 2016, múltiples órganos de las Naciones Unidas expresaron preocupación por la dimensión étnica cada vez mayor del conflicto[41]. Según Adama Dieng, Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio, existía un gran peligro de que la violencia se intensificara por razones étnicas “con posibilidades de genocidio”. Agregó que, si bien ello no había ocurrido aún, “el genocidio es un proceso y no tiene lugar de la noche a la mañana”[42]. En febrero de 2018, la oficina del Asesor Especial indicó al Grupo que había observado en 2017 la misma tendencia a hacer objeto a la población civil de actos brutales que en 2016, que a su juicio el riesgo de genocidio y otros crímenes atroces seguía siendo elevado y que había determinado que las divisiones étnicas se habían profundizado aún más[43]. Desde noviembre de 2017, por ejemplo, han proseguido los combates entre el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán y fuerzas de oposición en la gran Ecuatoria, en varias partes del gran Alto Nilo y en algunas partes del oeste de Bahr el Ghazal, causando enormes bajas civiles y desplazamientos de población coherentes con estas observaciones.

42. La violencia étnica en la región de la gran Ecuatoria continuó durante 2007 mientras el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán y las milicias dinka aliadas proseguían sus operaciones de limpieza contra fuerzas de oposición[44]. Como resultado de la intensificación de la violencia, se estima que 418.000 personas tuvieron que desplazarse internamente en 2017 en toda la región[45], en comparación con más de

---

contra civiles ni en la tarea de hacerles rendir cuenta de sus actos. Véase también A/HRC/37/71, párr 29., y www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22691&LangID=E.

[40] Múltiples entrevistas del Grupo con la UNMISS, personal de organismos de las Naciones Unidas, sudanesas del sur, trabajadores humanitarios, investigadores de derechos humanos y fuentes diplomáticas en Juba, Nairobi, Kampala, Nueva York, Londres y por teléfono entre julio de 2017 y febrero de 2018.

[41] Véase S/2017/326, párrs 61 a 67.

[42] UNMISS, transcripción prácticamente literal de una reunión con la prensa que tuvo lugar en Juba el 11 de noviembre de 2016.

[43] Entrevista telefónica realizada por el Grupo en febrero de 2018.

[44] Véanse detalles de la índole de esta operación en S/2017/979.

[45] Véase un mapa de las tendencias en el desplazamiento en Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Humanitarian Bulletin South Sudan, núm.1, 18 de enero de 2018. Se puede consultar en

150.000 personas en 2015[46]. Se estima que un millón de personas, en su mayor parte procedentes de las Ecuatorias, han huido a través de la frontera con Uganda a partir de mediados de 2016[47].

43. La región del Alto Nilo, la que más ha sufrido el conflicto desde que estalló en 2013, experimentó nuevamente violencia durante 2017 en razón de las operaciones de fuerzas del Gobierno en partes de Jonglei y el Alto Nilo en poder de la oposición[48]. En el estado de Unidad estallaron tensiones entre comunidades cuando el Vicepresidente Primero Taban Deng trató de extender la presencia de su facción del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición en gran parte de la zona. En un ataque contra el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (Machar) en Nimni, condado de Guit, que tuvo lugar el 26 de octubre de 2017, muchos civiles resultaron heridos y muchas *tukuls* (viviendas redondas) fueron incendiadas[49]; se saquearon y vandalizaron recintos e instalaciones de salud y nutrición de organizaciones no gubernamentales y hubo que suspender una operación de distribución de alimentos para ayudar a más de 1.700 personas; asimismo, la UNMISS tuvo que evacuar a varios trabajadores de organizaciones no gubernamentales internacionales[50].

44. El 24 de diciembre de 2017, fuerzas del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (Machar) atacaron en contravención del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades el pueblo de Koch en el estado de Unidad, controlado por el Gobierno. Hubo 15 muertos, tres de ellos niños, 26 heridos y 50 cabezas de ganado robadas[51]. Catorce miembros del personal humanitario fueron evacuados como resultado de los combates[52].

45. La visita del Vicepresidente Primero Taban Deng a la parte meridional de Jonglei a mediados de enero de 2018 dio lugar también a enfrentamientos entre el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán y el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (Machar) en los condados de Akobo[53] y Nyirol. Para fines de enero las hostilidades habían causado el desplazamiento de hasta 9.000 civiles a

---

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_180118_OCHA_SouthSudan_Humanitarian_Bulletin01.pdf.

[46] Véase el Plan de Respuesta Humanitaria 2016. Se puede consultar en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_hrp_SS_Final_WEB.pdf.

[47] El número total de personas desplazadas en todo el país desde que comenzó el conflicto ha superado los cuatro millones, de los cuales 1,9 millones son desplazados internos y se estima que hasta un 85% son niños y mujeres. Más de dos millones de personas han huido a países vecinos, 1,3 millones de ellas desde que estalló la violencia en julio de 2016. Plan de Respuesta Humanitaria 2018. Se puede consultar en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_2018_HumanitarianResponsePlan.pdf.

[48] También en Jonglei se registraron tensiones entre las comunidades murle y bor dinka a fines de 2017, de resultas de la cual unos 2.000 civiles fueron desplazados a la aldea de Payuel.

[49] Varias fuentes confidenciales de las Naciones Unidas y de organismos humanitarios.

[50] Sudán del Sur: Humanitarian Access Snapshot, octubre de 2017. Se puede consultar en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_20171114_Access_Snapshot_October_final.pdf.

[51] Informe del Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y de los Arreglos Transitorios de Seguridad, Violations of the ACOH: fighting in Koch (15 de enero de 2018). Se puede consultar en http://ctsamm.org/wp-content/uploads/2018/01/CTSAMM-REPORT-201805-FIGHTING-IN-KOCH.pdf.

[52] Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, South Sudan – Crisis (16 de enero de 2018). Se puede consultar en www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/01.16.18_-_USAID-DCHA_South_Sudan_Crisis_Fact_Sheet_3.pdf

[53] Algunos huyeron también al centro de protección de civiles de Bor. Diversas fuentes de las Naciones Unidas y de organismos humanitarios. Véase también https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_1802020_OCHA_SouthSudan_Humanitarian_Bulletin02.pdf

Akobo y de otros 4.000 a Etiopía[54]. En vista de la inseguridad en la zona, la UNMISS anunció a fines de enero de 2018 que se desplegarían periódicamente fuerzas de mantenimiento de la paz en el pueblo de Akobo para proporcionar protección a los civiles[55]. El Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y de los Arreglos Transitorios de Seguridad está llevando a cabo investigaciones para verificar si hubo una contravención del Acuerdo sobre la Cesación de las Hostilidades y quien la cometió[56].

B. Vulneración de los derechos del niño

46. La mayor parte de la violencia en Sudán del Sur recae sobre los niños y uno de cada dos son directamente afectados por el conflicto[57]. Los niños son víctimas en la actualidad de muertes, heridas, hambre, desplazamiento, enfermedades, reclutamiento forzado y falta de posibilidades de escolaridad. De los siete millones de personas en todo el país que, según se estima, necesitan asistencia humanitaria en 2018, el 60% (4.2 millones) son menores de 18 años[58]. Las tasas de malnutrición son más altas que nunca y se estima que 5,3 millones de personas en todo el país estaban a principios de 2018 en situación de grave inseguridad alimentaria a pesar de la temporada de cosecha, cifra que representa casi la mitad de la población total y un aumento del 40% desde enero de 2017[59]. Se cree que más de 1,1 millones de niños menores de cinco años están malnutridos en 2018 y, de ellos, 300.000 sufren malnutrición grave y están, por lo tanto, expuestos a un grave peligro de muerte[60]. La malaria prevenible es la causa primaria de la mala salud entre los menores de cinco años[61].

1. Ataques contra escuelas

47. La inseguridad generalizada sigue afectando a la educación en todo el país y más del 40% de las escuelas estaban cerradas en 2017. De las que estaban abiertas, una tercera parte comunicó haber sido atacada por lo menos una vez desde principios de 2017 y la mayoría de los incidentes consistía en robos y saqueos por elementos armados. Sudán del Sur registró en 2017 la proporción más alta del mundo de niños que no asisten a la escuela por segundo año consecutivo.

---

[54] Entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de enero de 2018 (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

[55] Información proporcionada a los medios de prensa por el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, David Shearer, el 24 de enero de 2018. Se puede consultar en https://unmiss.unmissions.org/near-verbatim-transcript-media-briefing-special-representative-secretary-general-united-nations-and

[56] Comunicado de prensa del Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y de los Arreglos Transitorios de Seguridad, 17 de enero de 2018. Se puede consultar en http://ctsamm.org/ctsamm-launches-an-investigation-in-jonglei/

[57] UNICEF, Nota de información, Childhood under attack: The staggering impact of South Sudan's crisis on children., diciembre de 201. Se puede consultar en www.unicef.org/southsudan/UNICEF_South_Sudan_Report_Childhood_under_Attack_15Dec_FINAL.pdf

[58] De un total de 5,8 millones de niños en el país. UNICEF, Humanitarian Action for Children, 2018. Se puede consultar en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018-HAC-South-Sudan.pdf

[59] De no proporcionarse asistencia humanitaria sostenida, casi las dos terceras partes de la población total, 7,1 millones de personas, corren el peligro de quedar expuestas a una severa inseguridad alimentaria a partir de mayo de 2018 y 155,000 de ellas sufren ya de hambre. Véase www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-news-detail/en/c/1103987/

[60] Comunicado de prensa conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, 6 de noviembre de 2017. Se puede consultar en www.fao.org/news/story/en/item/1051247/icode/

[61] UNICEF, Humanitarian Action for Children, 2018, nota 57 *supra*.

2. Niños soldados

48. Los niños son habitualmente secuestrados y obligados a sumarse a las fuerzas beligerantes, con lo que se convierten a la vez en víctimas y autores de graves conculcaciones de los derechos humanos. El Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán y el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (Machar) firmaron en 2012 y 2015, respectivamente, planes de acción con las Naciones Unidas para poner término al reclutamiento y la utilización de niños y prevenirlos. Se lograron algunos avances en cuanto al cumplimiento por las partes de estos planes cuando 1.755 niños fueron liberados en 2015[62], 179 en 2016[63] y, más recientemente, 311 en enero de 2018 en Yambio[64]. Sin embargo, en diciembre de 2017, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) comunicó que grupos armados habían reclutado más de 19.000 niños desde el comienzo de la guerra[65]. Esa cifra indica una tendencia que crece con rapidez, si se tiene en cuenta que para 2015 se había reclutado un total de 16.000 niños[66] y para 2016 un total de 17.000[67]. Actualmente se ha confirmado la presencia de niños soldados en la parte occidental de Bahr el Ghazal, en Ecuatoria Central y en Jonglei. Se está tratando de verificar los informes sobre la presencia de niños soldados en Ecuatoria occidental, Unidad y el Alto Nilo[68].

49. En el condado de Guit, estado de Unidad, lugar de origen del Vicepresidente Primero Taban Deng, por lo menos cinco maestros y tres contratistas empleados por una organización humanitaria para construir un establecimiento escolar fueron reclutados por la fuerza por el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (Taban) en 2017. Un contratista, que logró huir a pie al centro de protección de civiles de Bentiu dos días más tarde, tenía señales de tortura en el cuerpo. No se sabe dónde se encuentran actualmente los demás[69]. Las fuentes humanitarias y de derechos humanos entrevistadas por el Grupo confirmaron tener conocimiento directo de que el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (Taban) reclutaba y utilizaba niños[70]. Por lo menos 590 niños soldados

---

[62] Fueron liberados del Movimiento/Ejército Democrático de Sudán del Sur-Facción Cobra y el 13% de ellos eran menores de 13 años.

[63] De los 179 niños, 120 fueron liberados por el Movimiento/Ejército Democrático de Sudán del Sur-Facción Cobra, 25 por la facción de Riek Machar del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición en Pibor y 34 por fuerzas de seguridad del gobierno en el estado de Unidad. UNICEF, Release and Reintegration: Children Associated with Armed Forces and Armed Groups. (diciembre de 2017). Se puede consultar en www.unicef.org/southsudan/CAAFAG_Brief_December_2017.pdf

[64] Como parte de esta iniciativa, se ha registrado a un total de 700 niños para ponerlos en libertad gradualmente, 563del Movimiento de Liberación Nacional de Sudán del Sur y 137 asociados con el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición. Véase el comunicado de prensa de la UNMISS, 7 de febrero de 2018, en https://unmiss.unmissions.org/unmiss-welcomes-release-hundreds-former-child-soldiers-yambio

[65] UNICEF, Nota de información, nota 56 *supra*.

[66] UNICEF, Situation assessment of women and children in South Sudan, 2015. Se puede consultar en www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_South_Sudan_Situation_Assessment_of_Children_and_Women_2015.pdf

[67] UNICEF, comunicado de prensa, “Rise in child recruitment as conflict in South Sudan enters fourth year”, 15 de diciembre de 2016. Se puede consultar en www.unicef.org/southsudan/media_20493.html

[68] Informe del Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y de los Arreglos Transitorios de Seguridad, Child Soldiers (15 de enero de 2018). Se puede consultar en http://ctsamm.org/wp-content/uploads/2018/01/CTSAMM-REPORT-201802-CHILD-SOLDIERS.pdf

[69] Cuatro de los maestros de ese organismo habían sido reclutados por la fuerza en octubre de 2016 y enviados directamente al frente en Leer. Hay documentación confidencial en los archivos del Grupo que se recibió de una fuente humanitaria muy digna de crédito.

[70] Entrevistas telefónicas realizadas por el Grupo en enero y febrero de 2018. En 2016, las Naciones Unidas verificaron el reclutamiento y la utilización de 207 niños por el Movimiento/

fueron obligados a ingresar en las filas de la facción de Taban en Pibor, estado de Jonglei, en 2017[71]. Oficiales del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (Taban) en Masna, en la parte occidental de Bahr el Ghazal, reconocieron la presencia de niños en sus filas[72]. Sin embargo, cuando el Grupo planteó la cuestión al Vicepresidente Primero, éste negó que sus fuerzas reclutaran y utilizaran niños (véase el anexo III del presente informe).

C. Obstrucción de las misiones humanitarias y ataques contra trabajadores humanitarios

50. Sudán del Sur está pasando por una de las peores crisis humanitarias de la reciente historia en el mundo. Las cifras son impresionantes, en 2018 siete millones de personas, de una población total de 12 millones, necesitarán asistencia humanitaria, incluso después de las más de dos millones de personas que han huido del país. Las organizaciones humanitarias calculan que necesitarán 1.720 millones de dólares de los Estados Unidos para poder hacer frente a las crisis, múltiples y relacionadas entre sí, que se registran en el año en curso[73]. Como ya se ha señalado, a pesar de la tremenda necesidad, las organizaciones humanitarias hacen frente a un contexto extremadamente difícil para funcionar en el país. Las partes en el conflicto han seguido utilizando diversas tácticas para obstruir el acceso humanitario a la población en provecho de sus propios fines políticos, militares y económicos[74].

51. Con arreglo al derecho internacional, recae sobre todas las partes en el conflicto la responsabilidad por el bienestar de la población civil en su zona de operaciones y, si no pueden o no quieren atender las necesidades de quienes están sujetos a su control, están obligadas a permitir y facilitar la prestación de asistencia[75]. En su informe provisional de noviembre de 2017 (S/2017/979), el Grupo indicaba que el Gobierno era en gran medida responsable de la obstrucción de las operaciones humanitarias. La situación no ha cambiado, como se detalla en el anexo IV del presente informe. A juicio del Grupo, el objetivo del Gobierno consiste en controlar las corrientes de recursos a zonas en poder de la oposición, apropiarse de fondos destinados a fines humanitarios como fuente de ingresos y encubrir la vulneración patente de derechos humanos. Como parte de sus investigaciones, el Grupo analizó el grado en que se obstruía la asistencia humanitaria en el país, para lo cual empleó los tres indicadores siguientes.

Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (Taban). Véase S/2017/821, párr 145, y Human Rights Watch, South Sudan: Warring Parties Break Promises on Child Soldiers. 5 de febrero de 2018. Se puede consultar en www.hrw.org/news/2018/02/05/south-sudan-warring-parties-break-promises-child-soldiers

[71] Informe del Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y de los Arreglos Transitorios de Seguridad, Child Soldiers, 15 de enero de 2018, nota 67 *supra*.

[72] Véase el informe del Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y de los Arreglos Transitorios de Seguridad, Child Soldiers, 15 de enero de 2018, nota 67 *supra*.

[73] Plan de Respuesta Humanitaria 2018, nota 46 *supra*.

[74] Las tácticas incluyen el establecimiento deliberado de un entorno de acceso físico restringido mediante, entre otras cosas, la intimidación, el hostigamiento y la detención de personal humanitario; el saqueo o la destrucción de suministros y artículos humanitarios y la denegación de acceso a zonas cuando se sospecha que la población apoya a otras partes en el conflicto. Las partes crean también obstáculos indirectos consistentes en un sistema burocrático cada vez más complejo e imprevisible, la injerencia en la ejecución de programas y la desviación de recursos de ayuda para financiar su propio esfuerzo de guerra o para beneficiar a quienes las apoyan.

[75] www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumAccess_English.pdf.

1. Trabajadores humanitarios muertos en el ejercicio de sus funciones

52. Desde que comenzó la guerra en diciembre de 2013, por lo menos 95 trabajadores humanitarios han perdido la vida mientras cumplían sus funciones[76]. De ellos, 23 fueron asesinados después del informe final del Grupo de abril de 2017(S/2017/326). Se trataba en su mayoría de nacionales de Sudán del Sur.

2. Restricciones al acceso a las poblaciones que necesitan ayuda

53. Los trabajadores humanitarios, a los efectos de ayudar efectivamente a salvar vidas en un país en que prestan la enorme mayoría de los servicios esenciales, necesitan tener acceso sistemático y fiable a largo plazo a las poblaciones que necesitan ayuda[77]. Las fuentes humanitarias entrevistadas por el Grupo indicaron que elementos del Gobierno han seguido obstruyendo sistemáticamente en momentos críticos el acceso a quienes necesitan ayuda, con lo que han reducido las posibilidades de los trabajadores humanitarios de realizar operaciones efectivas y agravado los problemas de salud de esas poblaciones[78].

54. El Grupo, en su informe provisional (véase S/2017/979, secc. IV. A), se refirió a la negativa persistente y sistemática de asistencia para salvar la vida a poblaciones necesitadas en la zona del gran Baggari en el condado de Wau. En la evaluación de la seguridad alimentaria que se efectuó en septiembre de 2017, aplicando la clasificación integrada de la etapa de seguridad alimentaria se confirmó que el gran Baggari era motivo de especial preocupación y había 25.000 personas expuestas al hambre[79]. En la segunda quincena de noviembre de 2017 las organizaciones humanitarias pudieron prestar asistencia alimentaria de emergencia que era extremadamente necesaria. Se indicó, sin embargo, que la población, especialmente los niños, seguía estando muy expuesta a trastornos [80] y que la situación en cuanto a la seguridad alimentaria inevitablemente se agravaría si el acceso fuera restringido de nuevo por el Gobierno o en razón de combates.

---

[76] Correspondencia por correo electrónico con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (estadísticas al 19 de febrero de 2018).

[77] Varias fuentes humanitarias indicaron que la estrategia de las partes en el conflicto de permitir un acceso esporádico a ciertos lugares puede servirles “desde el punto de vista de las relaciones públicas” pero no empieza siquiera a atender realmente las enormes y complejas necesidades humanitarias.

[78] Entrevistas del Grupo con personal humanitario y de las Naciones Unidas en Nairobi y Juba y por teléfono, febrero de 2018

[79] Las 25.000 personas estaban en la etapa 5 (“catástrofe”), lo que denota una falta extrema de alimentos en la familia incluso si se utilizan plenamente todas las estrategias para subsanarla. Véase www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Alert_9_SouthSudan_Sept2017_FINAL.pdf y www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/south_sudan_cr_fs02_12-05-2017.pdf.

[80] Se entiende por trastornos, en la acepción empleada en el presente documento, cambios imprevistos en la situación de la población de la zona debidos a combates o a actos de las partes en el conflicto.

55. En diciembre de 2017 la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios comunicó que seguía sin tener acceso sistemático a la zona de Baggari aunque se había podido prestar a la población algunos servicios de atención primaria de salud[81]. En febrero de 2018, la Oficina comunicó una vez más que los asociados humanitarios tenían problemas para ingresar a la zona del gran Baggari[82]. Habida cuenta de que la temporada de escasez comenzó antes de lo normal[83] y de la posibilidad de futuras operaciones militares, "se necesita con urgencia enviar asistencia humanitaria multisectorial y en gran escala para salvar vidas"[84]. A juicio del Grupo, si bien en esta zona parece haber habido mayor acceso en los últimos meses, la extremadamente mala situación de salud de la población local, indicada en septiembre de 2017, únicamente podrá revertirse con asistencia sostenida en el curso del tiempo[85].

3. Trabas burocráticas cada vez mayores

56. Como se indicaba en el informe provisional del Grupo (S/2017/979), los trabajadores humanitarios no sólo hacen frente a amenazas a su seguridad sino también, y cada vez más, a una enorme cantidad de trabas burocráticas impuestas por las partes en el conflicto con miras a manipular y explotar la asistencia humanitaria en pro de sus objetivos políticos, militares y económicos[86]. El Grupo constató en sus investigaciones que las partes en el conflicto aprovechan un grado excepcional de imprevisibilidad y falta de coherencia en la aplicación de las normas para promover deliberadamente un entorno de incertidumbre y caos de manera de poder ejercer aún más control sobre los organismos humanitarios (véase por ejemplo el estudio de caso siguiente)[87].

---

[81] Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, South Sudan: Humanitarian Access Snapshot (diciembre de 2017), se puede consultar en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_20180118_Access_Snapshot_December_final.pdf.

[82] Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Humanitarian Bulletin South Sudan, núm. 31 (20 de febrero de 2018), se puede consultar en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_1802020_OCHA_SouthSudan_Humanitarian_Bulletin02.pdf.

[83] La temporada de escasez comenzó en enero de 2018, tres meses antes de lo normal.

[84] Integrated Food Security Phase Classification, "South Sudan: Current (January 2018) and Projected (Feb.-Apr. 2018; May-July 2018) Acute Food Insecurity and Acute Malnutrition Situation, se puede consultar en www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-map-detail/en/c/1103832/.

[85] Varias organizaciones humanitarias observaron en el curso de una misión en la zona un nivel considerablemente alto de malnutrición y elevados índices de malnutrición aguda severa, véase S/2017/979, párr. 40

[86] Ni los incidentes de seguridad ni las trabas burocráticas son una novedad en Sudán del Sur, ya que el sector de asistencia ha tenido algún tipo de presencia en el país durante los 30 últimos años. Sin embargo, algunos de los datos antes mencionados parecen apuntar a una tendencia al agravamiento de las amenazas a la seguridad y de sus efectos (la cifra de 95 muertos mencionada en el párrafo 52 *supra* es un indicador). La continua inseguridad en el país, sumada a los ataques directos contra personal humanitario, y las trabas indirectas han creado un clima de temor en la comunidad humanitaria.

[87] Entrevistas del Grupo con personal humanitario y de las Naciones Unidas en 2017 y en enero y febrero de 2018 en Juba, Nairobi, Kampala y Nueva York y por teléfono.

Estudio de caso

Documentos exigidos para viajar por vía aérea a lugares fuera de Juba

A partir de septiembre de 2017 un número considerable de miembros de organizaciones no gubernamentales no han podido embarcar en Juba en vuelos del Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas para dirigirse a lugares sobre el terreno porque no tenían un permiso de trabajo. En el curso de sus investigaciones, el Grupo obtuvo copia de una circular de fecha 5 de septiembre de 2017[a], emitida por el Secretario General de la Comisión de Socorro y Rehabilitación, por la cual se establecía un procedimiento distinto para el personal de organizaciones no gubernamentales que no tuvieran en el momento un permiso de trabajo. Según la circular, al planificar un viaje a un lugar sobre el terreno, el personal de estas organizaciones tiene que notificarlo a la Comisión con 72 horas de antelación e incluir una carta de su organización en que consten su nombre, puesto y lugar de destino.

Ahora bien, el Grupo ha observado varios problemas con este procedimiento. El Ministerio del Trabajo expide permisos de trabajo a todos los funcionarios extranjeros de organizaciones no gubernamentales para darles residencia legal en el país. Según una encuesta realizada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el 42% de las organizaciones no gubernamentales han tropezado con problemas para recibir permisos de trabajo, entre ellos la denegación del permiso o de su renovación, demoras para obtenerlos o la cancelación de permisos[b]. Habida cuenta de que la tramitación suele demorarse y con el fin de facilitar la entrega de ayuda, antes de septiembre de 2017 las autoridades autorizaban a los funcionarios de esas organizaciones para que viajaran aunque no tuvieran constancia escrita de una solicitud pendiente de permiso de trabajo.

A comienzos de septiembre de 2017, sin embargo, personal del aeropuerto no había permitido que varios funcionarios de esas organizaciones subieran a bordo para hacer viajes a otras partes del país porque no tenían un permiso de trabajo, a pesar de que sí tenían constancia de una solicitud pendiente. Si bien las organizaciones no gubernamentales por lo general tratan de cumplir con los reglamentos de un país, en estos casos no había instrucciones oportunas, previsibles o coherentes del gobierno acerca de los documentos necesarios para viajar fuera de Juba. Únicamente después de que presentaran reclamaciones varias organizaciones no gubernamentales cuyo personal no había podido viajar, la Comisión de Socorro y Rehabilitación expidió y distribuyó la circular, pero únicamente a algunas organizaciones. Además, la aplicación de la circular por el personal del aeropuerto resultó ser incoherente y confusa.

En noviembre de 2017, Paul Dhel, ex Vicepresidente de la Comisión, publicó en medios sociales una lista de los nombres de los trabajadores humanitarios que no tenían permiso de trabajo. La lista fue suprimida dos semanas más tarde después de que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios presentara una protesta formal aduciendo cuestiones de privacidad[c].

Para complicar más las cosas, el 28 de noviembre de 2017 la Comisión de Socorro y Rehabilitación anunció que dejaría de expedir autorizaciones de viaje para el personal humanitario cuya solicitud de permiso de trabajo estuviera pendiente[d]. Se supone, en cambio, que el personal debe presentar al Ministerio del Trabajo una solicitud para obtener una autorización de viaje. Tras un periodo de incertidumbre, el Ministerio informó a los organismos humanitarios que era suficiente para viajar presentar un recibo de pago de la solicitud de un permiso de trabajo mientras éste estuviera pendiente. De todas maneras, varios funcionarios humanitarios no pudieron embarcar en vuelos internos a pesar de tener esos recibos porque resultó que habían pagado los derechos aplicables al momento de su solicitud, antes del 24 de noviembre

de 2007, fecha en que se fijó la nueva estructura de derechos (véase *supra*). Se esperaba entonces que pagaran el nuevo derecho, a pesar de que la circular estipulaba claramente que éste se cobraría exclusivamente a las solicitudes de permiso de trabajo presentadas después del 31 de octubre de 2017 y que habría un periodo de transición en que las solicitudes pendientes estarían sujetas al pago de los derechos anteriores antes de que fueran aplicables los nuevos[e].

[a] Véase copia de la carta a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en http://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/2017-09/Work%20permit%20circular%205%20sept%202017.pdf.

[b] Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. *Bureaucratic Access Impediments to humanitarian operations in South Sudan* (junio de 2017). Se puede consultar en http://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/2017-11/SBureaucratic_Access_Impediments_Survey_Report.pdf.

[c] Correspondencia del Grupo con una fuente humanitaria confidencial, febrero de 2018.

[d] Véase copia de la carta a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en http://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/2017-11/RRC%20Travel%20Authorisation%20Stoppage%20November%2028%202017_0.pdf.

[e] Véase copia de la circular, http://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/2017-10/Work%20permit%20fees%2024%20Oct%202017.pdf.

57. En general, las organizaciones humanitarias consideran que el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán es con mucho la entidad más responsable de los obstáculos para la prestación de ayuda al restringir el desplazamiento, imponer tributos ilegales en los puntos de control, amenazar e intimidar a los trabajadores humanitarios, confiscar la ayuda e injerirse en las operaciones sobre el terreno. También indicaban que autoridades civiles, de condado y municipio, entre otras[88], y la Comisión de Socorro y Rehabilitación, entrababan las operaciones de ayuda aplicando normas que cambiaban en cada momento. Los actos de los elementos armados no estatales eran considerablemente menos graves que los de las autoridades de gobierno[89].

58. En todo caso, en el contexto de la imposición de medidas de seguridad cada vez mayores en Sudán del Sur, el Servicio de Seguridad Nacional, bajo el mando de Akol Koor Kuc, es calificado sistemáticamente de la entidad más perjudicial para las operaciones humanitarias ya que aplica las tácticas más perniciosas para controlar activamente o extorsionar a las entidades humanitarias. Además, Deng Tong Kenjok, Secretario General de la Comisión de Socorro y Rehabilitación, y el ex Vicepresidente Paul Dhel han sido fundamentales en la tarea de establecer normas nuevas y en muchos casos confusas respecto de las actividades humanitarias[90]. Paul Dhel tramó el

[88] La proliferación de autoridades locales, que se debe en gran parte a que las autoridades del país establecieron 32 estados, con el consiguiente aumento del número de autoridades locales, a fin de regular a las entidades humanitarias ha hecho que las negociaciones sobre acceso humanitario sean cada vez más complejas e imprevisibles.

[89] Entrevistas del Grupo con personal humanitario y de las Naciones Unidas en 2017 y en enero y febrero de 2018 en Juba, Nairobi, Kampala y Nueva York y por teléfono. Véase también Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. *Bureaucratic Access Impediments to humanitarian operations in South Sudan* (junio de 2017). Se puede consultar en http://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/2017-11/SBureaucratic_Access_Impediments_Survey_Report.pdf.

[90] Dhel envió el 28 de noviembre de 2017 la circular relativa a las autorizaciones de viaje (véase el estudio de caso que sigue al párr. 56 *supra*). Dhel, al igual que muchos otros, fue removido del cargo en febrero de 2018 y reemplazado por Santino Bol Mouterdit. Véase www.gurtong.net/ECM/Editorial/tabid/124/ID/21256/Default.aspx.

aumento del costo de los permisos de trabajo en octubre de 2017[91] y de los derechos de inscripción de organizaciones no gubernamentales en mayo de 2017[92], concebidos claramente ambos como medios de recaudar fondos por la Comisión de Socorro y Rehabilitación. Un interlocutor de alto nivel señaló que la actitud de Dhel respecto de la comunidad de organizaciones no gubernamentales era "beligerante y agresiva"[93].

59. Estas trabas humanitarias tienen un costo muy alto. Las organizaciones humanitarias gastaron en Sudán del Sur 1.200 millones de dólares de los Estados Unidos en 2017 únicamente[94]. Ello representa una aportación financiera muy importante en un país en que el presupuesto público para 2016/17 ascendía únicamente a 801 millones de dólares de los Estados Unidos[95]. En vista del actual colapso de la economía y la consiguiente reducción de las fuentes de ingresos públicos, tanto el Gobierno como agentes no estatales tratan cada vez más en medio del conflicto de hallar formas de apropiarse de fondos destinados a fines humanitarios. Un interlocutor señaló que el gobierno veía la presencia de entidades humanitarias en el país como "nuevos pozos de petróleo"[96]. Como consecuencia, el costo de las operaciones humanitarias ha aumentado considerablemente, tanto directa como indirectamente, como resultado de las demoras en operaciones humanitarias o su cancelación forzada.

60. El cobro de derechos por los permisos de trabajo, problema permanente para los organismos humanitarios en los últimos años, constituye un excelente ejemplo del intento del Gobierno por apropiarse de recursos de ayuda. El 24 de octubre de 2017, el Ministerio del Trabajo aumentó el costo de los permisos anuales de trabajo de 100 a hasta 4.000 dólares de los Estados Unidos para el personal internacional[97]. De los fondos para prestar asistencia a fin de salvar vidas habrá que desviar por lo menos 7.000.000 de dólares para pagar cada año permisos de trabajo. Este cálculo se basa en el supuesto razonable de que todo el personal internacional de organizaciones no gubernamentales internacionales está comprendido en las dos categorías más altas para el cobro de permisos, de 3.000 a 4.000 dólares[98]. Para dar cierto contexto a los derechos extremadamente elevados que se cobran en Sudán del Sur para expedir permisos, el Grupo reunió datos acerca de los derechos comparables por concepto de permiso de trabajo en Uganda, Kenya y Etiopía, que se indican en el cuadro siguiente.

---

[91] Véase copia del aviso en http://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/2017-10/Work%20permit%20fees%2024%20Oct%202017.pdf.

[92] Véase copia de la carta dirigida a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Sudán del Sur en http://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/2017-07/Increasment%20of%20registration%20fee%20001%20%281%29%20%281%29.jpg.

[93] Entrevistas del Grupo con personal humanitario y de las Naciones Unidas en 2017 y en enero y febrero de 2018 en Juba, Nairobi, Kampala y Nueva York y por teléfono.

[94] Para prestar asistencia a cinco millones de personas. Entrevista del grupo con el Coordinador Humanitario en febrero de 2018 en Juba.

[95] Véase cuadros del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017/18 (http://grss-mof.org/wp-content/uploads/2017/11/book-final-1718-1.pdf), págs. 12 y 13.

[96] Entrevista del Grupo con una fuente humanitaria confidencial, febrero de 2018, Juba.

[97] Véase copia del aviso en http://docs.southsudanngoforum.org/node/398.

[98] Entrevistas del Grupo con personal humanitario en febrero de 2018 en Nairobi. Véase también https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_20180213_Annual_Access_Snapshot_Final.pdf.

País	*Población total estimada*	*Población estimada que necesitan asistencia humanitaria*[a]	*Derecho anual por el permiso de trabajo (dólares de los Estados Unidos)*
Uganda	43 millones	1,5 millones	2.500
Kenya	50 millones	5,6 millones	2.000
Etiopía	105 millones	8,5 millones	400
Sudán del Sur	12 millones (con inclusión de más de 2 millones de refugiados en países vecinos)	7 millones	4.000 en el caso de consultores/administradores[b]; 3.000 en el caso de profesionales[b]; 2.000 en el caso de técnicos; 1.000 en el caso de trabajadores especializados; 500 en el caso de trabajadores no especializados.

[a] Reliefweb, estimaciones a noviembre de 2017.
[b] Cabe suponer que todo el personal internacional que trabaja para organizaciones no gubernamentales quedará comprendido en la primera o la segunda categoría.

V. Fuentes de fondos

61. El Grupo, a fin de comprender mejor las fuentes de los fondos de las partes beligerantes, hizo una investigación de los siguientes sectores:

A. Ingresos derivados del petróleo

62. Los ingresos derivados del petróleo constituyen la fuente primaria de moneda dura para el Gobierno. En la actualidad, la producción de petróleo se mantiene en 135.000 barriles[99]. Los ingresos netos que se proyectan por concepto del petróleo, según el presupuesto para 2017/18, ascienden a unos 166 millones de dólares de los Estados Unidos, en comparación con 103 millones en el presupuesto para 2016/17[100]. En un intento de atraer inversores inversionistas extranjeros para impulsar la producción, el Gobierno organizó en octubre de 2016 en Juba una conferencia sobre el petróleo que, sin embargo, no dio lugar a asociaciones con grandes inversionistas en razón de la inseguridad imperante en el país[101].

[99] Véase la presentación oficial del Ministro de Petróleo de Sudán del Sur, Ezekiel Lol Gatkuoth, a la Conferencia Africana de Petróleo y Energía, junio de 2017, en http://africaoilandpower.com/2017/06/08/presentation-ministry-of-petroleum-south-sudan/.

[100] Cabe observar que los ingresos netos por concepto de petróleo en 2017/2018 pueden ser inferiores a las proyecciones presupuestarias en razón de los reembolsos a los intermediarios. Según documentos obtenidos por el Grupo, en diciembre de 2017 se pagaron a compañías intermediarias de petróleo 184 millones de dólares de los Estados Unidos. Véanse los cuadros presupuestarios aprobados para el ejercicio fiscal 2017/18 (http://grss-mof.org/wp-content/uploads/2017/11/book-final-1718-1.pdf), pág. 19; véase también cuarto trimestre, 2016/17, informe fiscal de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Planificación Económica de Sudán del Sur, pág. 8.

[101] Algunos inversionistas tal vez no quieran invertir en el país porque ha quedado claro que la empresa estatal Nile Petroleum Company debe ser incluida obligatoriamente como accionista en todos los proyectos. Véase www.reuters.com/article/southsudan-oil/corrected-south-sudan-oil-conference-fails-to-draw-biggest-energy-firms-idUSL8N1MM43F. Confirmado también en entrevistas con fuentes de la industria petrolífera (febrero de 2018) y fuentes de organizaciones no gubernamentales en marzo de 2018.

63. Sin embargo, y a pesar de la baja producción de petróleo en comparación con la terrible situación económica del país[102], el Grupo tiene razones para llegar a la conclusión, en vista de documentos que obtuvo por los que se autorizaban en 2015 pagos para el suministro de municiones por valor de 30,73 millones de dólares de los Estados Unidos a Bosasy Logistics Ltd, empresa con sede en Kampala[103], de que el petróleo sigue siendo la principal fuente de fondos para el esfuerzo de guerra del Gobierno. Se están haciendo otros intentos de recaudar más ingresos mediante ventas anticipadas a compañías intermediarias de petróleo. El Grupo proseguirá su investigación de estas cuestiones.

B. Ingresos de la madera utilizados para financiar a grupos armados

64. Se estima que un 29% de la superficie terrestre del país corresponde a bosques y selvas, con 68 plantaciones, principalmente de teca y otras variedades exóticas, que cubren una superficie de hasta 187.900 hectáreas[104]. Como se indicaba en el informe provisional del Grupo (S/2017/929), la tala y venta de teca y otras maderas duras constituyen una importante fuente de fondos para los grupos armados que operan en esa zona. Ello ha ocurrido durante toda la historia del conflicto en Sudán del Sur[105]. La investigación que está llevando a cabo el Grupo del comercio actual en teca demuestra que esta tendencia histórica se mantiene y el Gobierno y grupos armados de oposición se benefician del comercio ilegal en el sector.

65. El Ejército de Liberación Popular del Sudán en la Oposición y el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán (Machar) tienen sistemas de protección que, en la práctica, exigen a las compañías de teca y a quienes la transportan hacer pagos en dinero directamente a grupos armados para entrar a los bosques y cortar árboles o a hacerlos en bloqueos y puntos de control a lo largo de las rutas de tránsito más importantes[106]. Esta actividad tiene lugar primordialmente en Ecuatoria Central y Occidental, así como en el estado de Wau en lo que era antes la parte occidental de Bahr el Ghazal. Para las empresas del sector de la teca y para los pequeños taladores, los pagos a grupos armados constituyen un costo necesario del negocio ya que, de negarse a hacerlos, los equipos que talan la teca y quienes la transportan quedarían expuestos al peligro de ataques. Los caminos son cada vez más peligrosos a medida que muchos civiles huyen a Uganda y el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán, el Ejército de Liberación Popular del Sudán en la Oposición y otros grupos armados luchan por controlar territorio (véase en el anexo V un examen detallado de la tributación ilegal en los puntos de control). Los camioneros han sufrido asaltos, robos

---

[102] La deuda del Gobierno al Sudán es en la actualidad de 1.300 millones de dólares de los Estados Unidos. Véase www.reuters.com/article/us-southsudan-oil/south-sudan-owes-sudan-1-3-billion-from-2012-oil-deal-official-idUSKBN1DZ2XK .

[103] Los documentos se encuentran en el archivo del Grupo.

[104] Presentación del Gobierno de Sudán del Sur en el seminario sobre ordenación forestal y cambio climático, 14 a 16 de diciembre de 2016, Dar-Es-Salaam. Se puede consultar en www.fao.org/forestry/download/45524-08723e0208fecb5fe69a182241c4081f8.pdf. Confirmado en correspondencia con una fuente confidencial de la industria de la teca el 1 de marzo de 2018,

[105] Los rebeldes anyanya de Sudán del Sur en la primera guerra civil en el Sudán (1955-1972) y el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la segunda guerra civil del Sudán (1983-2005) talaron y vendieron teca para financiar la rebelión. Según un parlamentario de Sudán del Sur, “en otros lugares había diamantes de sangre. En el norte había petróleo de sangre, el Gobierno del Sudán hacia perforaciones en el sur para comprar armas a Corea, China, Iraq y la Unión Soviética. Para nosotros [en el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán había teca de sangre”.

[106] Entrevistas con representantes del gobierno, de la UNMISS y de la oposición efectuadas entre noviembre de 2017 y febrero de 2018 en Nairobi, Moscú, Kampala y Juba. Véase asimismo la investigación realizada por el Instituto Noruego de Asuntos Internacionales en www.kuronvillage.net/2017/NUPI_rapport_+South+Sudan_Rolandsen_Kindersley.pdf, pág.18.

y disparos. En un caso, según una fuente del sector, un camionero llegó a la frontera con Uganda con el camión vacío y sin más vestimenta que su ropa interior[107].

66. El sistema habitual de protección para que quienes talan teca y quieren trabajar en zonas en poder del Ejército de Liberación Popular del Sudán en la Oposición, como Loca, en el estado del Río Yai, en que tiene lugar gran parte de la tala ilegal (véase en el anexo VI un examen detallado de las actividades de grupos armados en Loca) consiste en ponerse en contacto con representantes de ese Ejército en países vecinos para determinar qué volumen aproximado de teca se proponen talar y un cronograma de los "servicios de protección". La cantidad de dinero que se paga por anticipado para recibir protección de ese Ejército fluctúa entre 14 y 16 dólares por árbol o cerca de 2.000 dólares por camión cargado con unos 120 troncos enteros. Funcionarios del gobierno del estado del Río Yai afiliados al Ejército de Liberación Popular del Sudán en la Oposición distribuyen los ingresos entre diversas unidades de ese Ejército o lo usan para comprar arroz, azúcar y otros alimentos básicos[108]. Las unidades del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán que operan en Yai y los alrededores también cobran 20 a 22 dólares por árbol o unos 2.500 dólares por camión para prestar servicios de protección, que prestan asimismo para el transporte de troncos de teca a la frontera con Uganda[109].

C. Extorsiones a personal de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur

67. La idea de que las entidades internacionales son los "nuevos pozos de petróleo" del país (véase el párr. 59 *supra*) es aplicable no sólo a las organizaciones humanitarias sino también a otras. El Grupo constató en el curso de investigaciones que, a pesar del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas concertado entre la UNMISS y el Gobierno, el personal de la Misión era objeto con cada vez mayor frecuencia de extorsión abierta y otras formas de explotación por parte de miembros del Gobierno, consistentes en que:

a) *Se exige que contratistas internacionales de la UNMISS tengan permisos de trabajo y paguen derechos de visado de ingreso.* En varias ocasiones entre julio y diciembre de 2017, funcionarios de la Dirección de Nacionalidad, Pasaportes e Inmigración pidieron a contratistas y subcontratistas internacionales de la UNMISS al momento de su llegada al Aeropuerto Internacional de Juba que pagaran 100 dólares de los Estados Unidos por concepto de un visado de un mes de duración; tras pagarlos, recibieron visados de un mes de duración y tuvieron que pagar otros 20 a 400 dólares de los Estados Unidos por concepto de visados de doce meses de duración;

b) *Se exige que personal de la UNMISS pague derechos de visado de ingreso.* El 17 de julio de 2017, un funcionario internacional de la UNMISS fue interceptado al llegar al Aeropuerto Internacional de Juba y detenido por funcionarios de la Dirección de Nacionalidad, Pasaportes e Inmigración que amenazaron con deportarlo porque, según ellos, había viajado en un vuelo comercial con un pasaporte nacional en lugar de un Laisser Passer de las Naciones Unidas. Luego exigieron 100 dólares de los Estados Unidos para estampar un visado de ingreso en su pasaporte nacional;

[107] Entrevista con un representante del sector de la teca realizada el 3 de noviembre de 2017.

[108] Entrevistas con miembros del Ejército de Liberación Popular del Sudán en la Oposición realizadas en noviembre de 2017 y enero de 2018 en Nairobi y Kampala. Confirmado también en una entrevista con un analista independiente que tuvo lugar en noviembre de 2017 y enero de 2018.

[109] Entrevistas con miembros del Ejército de Liberación Popular del Sudán en la Oposición realizadas en noviembre de 2017 y enero de 2018 en Nairobi y Kampala. Confirmado también en una entrevista con un analista independiente que tuvo lugar en noviembre de 2017 y enero de 2018.

Ante el temor de ser deportado, el funcionario se vio obligado a cumplir con la exigencia. Se registró una situación similar entre los días 3 y 10 de octubre de 2017, en que funcionarios de la Dirección exigieron el pago de los mismos derechos de visado en el Aeropuerto a 27 funcionarios de la UNMISS que ingresaban al país por primera vez. A pesar de que los funcionarios presentaron "cartas de autorización" del Ministerio de Relaciones Exteriores, los funcionarios insistieron de todas maneras en que efectuaran el pago;

c) *Se exigen pagos a contratistas de la UNMISS.* El 13 de julio, Tristar LLC[110], empresa con la que la UNMISS contrata el suministro de combustible, recibió una carta del Departamento de Investigaciones Penales de Sudán del Sur en que se exigía que, a fin de que se expidiera el "certificado de buena conducta" necesario para obtener permisos de trabajo, pagara derechos por valor de 150 dólares de los Estados Unidos por cada uno de sus empleados internacionales. En varias ocasiones, funcionarios de la Dirección de Nacionalidad, Pasaportes e Inmigración exigieron que los empleados de Tristar LLC pagaran, al momento de su llegada al Aeropuerto, sumas que fluctuaban entre 50 y 150 dólares de los Estados Unidos cada uno para obtener un permiso de trabajo;

d) *Confiscación de artículos de la UNMISS.* El 20 de octubre de 2017, un cargamento de artículos de la UNMISS fue confiscado por funcionarios de aduana y el Servicio de Seguridad Nacional a su llegada al aeropuerto de Wau, so pretexto de que representantes de la Misión no habían cumplido su obligación de pagar impuestos. El incidente tuvo lugar a pesar de que la UNMISS había coordinado anteriormente con la Dirección de Aduanas y el Servicio de Seguridad Nacional la llegada del cargamento y constituía claramente un intento de cobrarle ilegalmente impuestos[111].

68. En el curso de su investigación de las extorsiones financieras a la UNMISS, el Grupo no pudo identificar las personas concretamente responsables de haber cobrado el dinero, transferido a los fondos o impartido órdenes a ese respecto. En todo caso, el hecho de que representantes de la Dirección de Nacionalidad, Pasaportes e Inmigración y del Servicio de Seguridad Nacional recauden fondos a título oficial significa que ese dinero se puede utilizar para financiar ciertas actividades del gobierno.

VI. Armas

69. En el período a que se refiere el informe han persistido las operaciones militares y los enfrentamientos armados en diversos lugares del país. Como se indica en numerosos informes, gran parte de la violencia continua tiene lugar contra la población civil de Sudán del Sur[112]. En esos informes queda también de manifiesto que en la mayor parte de los actos de violencia se siguen empleando armas pequeñas y armas ligeras. En algunas de las operaciones militares en mayor escala, como la ofensiva actual del Ejército de Liberación Popular del Sudán en Jonglei, se utilizan

[110] Tristar LLC es la empresa contratista oficial para el suministro de combustible a la Misión y tiene su sede en Dubai (http://www.tristar-group.co/about-us/).

[111] Documentación confidencial en los archivos del Grupo. Confirmado también en entrevistas con fuentes de la UNMISS en enero de 2018.

[112] Véase, por ejemplo, el informe de 13 de marzo de 2018 de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos humanos en Sudán del Sur (A/HRC/37/71) en que se documentan extensamente ataques contra civiles en todo el país que incluyen casos de ataques deliberados contra civiles o en que elementos armados no discriminaron entre blancos civiles y militares.

también vehículos blindados y armas antiaéreas montadas en vehículos[113]. Un testigo de esa ofensiva en una aldea cerca de Mathiang en junio de 2017 declaró:

> "En Malow, el [ejército del] gobierno simplemente disparaba indiscriminadamente contra los aldeanos… Muchos huimos y abandonamos nuestros hogares. El ejército parecía estar en todas partes, había muchos soldados y no hacían más que disparar. Algunos usaban rifles y los que estaban en vehículos disparaban contra los civiles con armas enormes"[114].

70. A fin de lograr un mejor conocimiento de los factores que subyacen en este tipo de violencia en Sudán del Sur y, a la vez, la propagan, el Consejo de Seguridad encomendó al Grupo de Expertos en el párrafo 18c) de la resolución 2206 (2015) el mandato de:

> "Reunir, examinar y analizar información relativa al suministro, la venta o la transferencia de armas, material conexo y asistencia militar o de otra índole conexa, incluso a través de las redes de tráfico ilícito, a personas y entidades que socaven los procesos políticos para alcanzar un acuerdo de paz definitivo o participen en actos que violen el derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, según proceda".

71. Es importante señalar que se encomienda este mandato en circunstancias de que no hay un embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad a Sudán del Sur. Por lo tanto, el Consejo no prohíbe que los Estados Miembros vendan armas a este país[115]. En todo caso, el Consejo de Seguridad, en el párrafo 19 de la resolución:

> "*Insta* a todas las partes y a todos los Estados Miembros, así como a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, a que cooperen con el Grupo de Expertos, e insta también a todos los Estados Miembros afectados a que garanticen la seguridad de los miembros del Grupo de Expertos y su acceso sin trabas, en particular a personas, documentos y lugares, para qué ejecute su mandato".

72. Por más que la presentación de informes sobre transferencias ilícitas de armas es un factor importante, el principio operativo fundamental en que se inspiran las investigaciones del Grupo en la materia consiste en identificar, con la cooperación de Estados Miembros, a quienes emplean armas para socavar "los procesos políticos" o cometen "actos que violen el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario".

73. Durante todo su mandato actual (y a partir de su establecimiento en marzo de 2015), el Grupo ha tratado sistemáticamente de obtener información verificable basada en declaraciones de testigos, documentos, registros de vuelo e inspecciones de armas[116]. El éxito de estas investigaciones depende en gran medida de que el Grupo pueda seguir el rastro de las armas hasta llegar a su fabricante. Los detalles sobre el origen de un arma suelen arrojar valiosa información adicional acerca de su venta y permiten establecer cómo y cuándo entró el país y qué entidad la adquirió[117]. Ello es particularmente útil en el caso de las municiones, ya que hay una abundante cantidad

---

[113] Nota diplomática de fecha 12 de enero de 2018 en los archivos del Grupo e informes confidenciales sobre derechos humanos.

[114] Informe de la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur, (A/HRC/37/CRP.2), párr. 557. Se puede consultar en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_37_CRP.2_EN.pdf.

[115] La Unión Europea y los Estados Unidos de América han impuesto sus propios embargos de armas y otros Estados han indicado que, en virtud de compromisos bilaterales, imponen a sí mismos restricciones a las ventas de armas a Sudán del Sur.

[116] Véase un ejemplo de una inspección de armas en S/2017/979, anexo 1.

[117] La acción internacional para regular la adquisición de armas y eliminar el tráfico ilícito de ellas tiene como fundamento esta idea básica.

de armas pequeñas en Sudán del Sur, pero no la hay de municiones[118]. Esto significa que todos los elementos armados buscan constantemente nuevos suministros de municiones y al rastrear las fuentes de éstos pueden quedar de manifiesto pruebas de una adquisición reciente. En algunos casos, esta información permite establecer un vínculo entre ciertos envíos e incidentes concretos, lo que sirve para establecer el mando, el control y la responsabilidad en actos incluidos en el mandato del Grupo, por ejemplo el de proporcionar al Comité información acerca de la posible designación de individuos y entidades responsables de actos punibles, como los dirigidos deliberadamente contra civiles.

74. Un incidente de esa índole que el Grupo ha tratado de investigar durante su mandato es el ataque que tuvo lugar contra la base de la UNMISS en Bor. El 15 de abril de 2014, fuerzas de oposición atacaron y capturaron el pueblo de Bentiu, en el estado de Unidad y dieron muerte a unos 353 civiles[119]. Se dijo que civiles que residían en el centro de protección de civiles de la base de la UNMISS en Bor habrían celebrado la toma de Bentiu por el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición[120]. Posteriormente, el 17 de abril de 2014, el recinto de la UNMISS en Bor fue atacado por unos 300 hombres de la comunidad local que dieron muerte a por lo menos 47 civiles inermes que estaban refugiados en ese centro. Las víctimas fueron atacadas porque eran parte del grupo étnico nuer y en venganza por el ataque contra Bentiu[121]. Había entre las víctimas "cuatro niños (de 8,7, 3 y 2 años de edad) y siete niñas (de 17, 15, 14, 11, 10 y 5 años y ocho meses de edad). Por lo menos 21 de las víctimas estaban embarazadas cuando fueron asesinadas"[122].

75. La información que reunió el Grupo indica que un alto cargo político Bor y actual ministro en el Gobierno de Transición participó personalmente en la planificación del ataque contra la base de la UNMISS[123]. Esta persona ha sido un importante obstáculo en los intentos de establecer la paz en Sudán del Sur y sigue siéndolo. A juicio del Grupo, una de las razones fundamentales por las que siguió obstruyendo el proceso de paz consiste en que quiere evitar que se haga valer su responsabilidad por el ataque contra la base de la UNMISS.

---

[118] El Grupo ha indicado anteriormente (véase S/2017/793) que el ex Jefe de Estado Mayor del Ejército de Liberación Popular del Sudán, General Paul Malong, había tratado de establecer una fábrica de municiones en Sudán del Sur para atender las necesidades de las operaciones militares del gobierno.

[119] Informe de la División de Derechos Humanos de la UNMISS. Se puede consultar en: www.ohchr.org/Documents/Countries/SS/UNMISS_HRDJanuary2015.pdf

[120] *Ibid*, párr. 81.

[121] *Ibid*, párr. 100: "Las intenciones [del ataque] quedaban también de manifiesto en el lenguaje amenazador que empleaban mucho de los atacantes, según señalaron testigos y sobrevivientes: "Son malos, los nuer son malos". "Venimos a matar a los nuer".

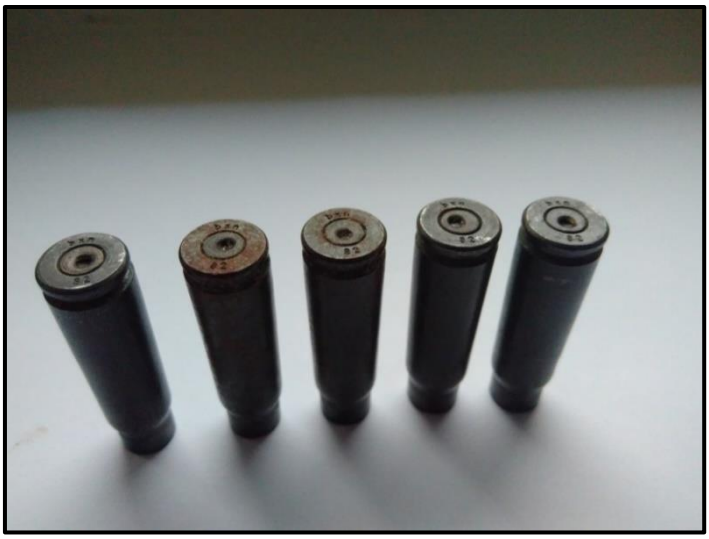
[122] *Ibid*, párr. 106.

[123] Los Estados Unidos de América, en la declaración por la que anunciaron sanciones específicas el 6 de septiembre de 2017, indicaron que Michael Makwei estaba involucrado en la "planificación y coordinación" del ataque el 17 de abril de 2014. Esta afirmación está corroborada por declaraciones formuladas en agosto de 2017 por un ex alto funcionario del Ejército de Liberación Popular del Sudán y en febrero de 2018 por un ex alto funcionario de Sudán del Sur que habló con el Grupo a condición de que se asegurara la confidencialidad. Véase www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0152.aspx

76. Los cartuchos reunidos como pruebas de la masacre indican que probablemente los atacantes obtuvieron municiones que antes habían estado en arsenales del gobierno de Sudán del Sur (véase la figura I)[124]. Sin embargo, los expertos en armas no habían constatado anteriormente la existencia en Sudán del Sur de municiones de 7.62x39mm (que se utilizan para los rifles de asalto del tipo AK) con el sello 211_79 (que se puede observar en la figura I)[125]. Ello puede significar que las municiones entraron al país y fueron entregadas a los atacantes poco antes de abril de 2014, lo que puede constituir un provechoso elemento de investigación. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, el Grupo no ha podido avanzar en esta investigación.

Figura I

Cartuchos de 7.62x39mm con marcas que indican que fueron fabricadas en la ex Checoslovaquia, recogidos en el centro de protección de civiles de la UNMISS en Bor el 17 de abril de 2014 (sello BxN 82)



[124] Las municiones con estas marcas son comunes en Sudán del Sur y desde hace tiempo los investigadores han documentado su existencia. No hay posibilidades de rastrear su fuente ni su distribución.

[125] Correspondencia entre el Grupo y expertos en el rastreo de armas, mayo y diciembre de 2017, e informe confidencial sobre el rastreo de municiones que se encuentra en el archivo del Grupo.

Figura II

Cartuchos de 7.62x39mm con marcas que indican que fueron fabricados en la República Popular China recogidos en el centro de protección de civiles de la UNMISS en Bor el 17 de abril de 2014 (sellos 211 77; 211 79 y 101 79)

77. El 2 de enero de 2018, el Coordinador y experto en armas del Grupo escribió a la Misión Permanente de China ante las Naciones Unidas para pedir ayuda en la identificación del fabricante de estas municiones "en la esperanza de poder rastrear con precisión su distribución e identificar a los autores de la masacre"[126]. No es la primera vez que el Grupo ha constatado la presencia de armas y municiones chinas en Sudán del Sur ni pedido ayuda para rastrear su origen[127]. La Misión Permanente envió al Coordinador el 29 de enero de 2018 una respuesta por correo electrónico en que indicaba que China había cumplido siempre estrictamente las resoluciones del Consejo de Seguridad en la materia, había adoptado una actitud cauta y responsable con respecto a la exportación de armas y jamás había exportado armas a entidades no estatales ni a individuos. La Misión agregaba que tenía razones para dudar de que el Grupo estuviera autorizado para plantear cuestiones que habían tenido lugar en abril de 2014, casi un año antes de la aprobación de la resolución 2206 (2015), por la cual el Consejo había establecido el régimen de sanciones. Además, "instamos seriamente

[126] El Grupo se reunió con la Misión Permanente de China en Nueva York el 14 de noviembre de 2017, ocasión en la cual se pidió también se prestara asistencia en el rastreo de armas y se indicó que la respuesta que la solicitud anterior de 2 de febrero de 2017 no había tenido respuesta. Véase en el anexo VII del presente informe la correspondencia del Grupo.

[127] Desde el establecimiento del Grupo, investigadores en Sudán del Sur han encontrado reiteradamente armas y municiones con marcas que indican que han sido fabricadas en China. En su informe de enero de 2016 (S/2016/70), por ejemplo, el Grupo indicaba que, en una muestra de 208 municiones examinadas, "más del 60% habían sido fabricadas en China". Es un informe final de abril de 2017 (S/2017/326), el Grupo indicaba que las armas, confiscadas a las fuerzas de Machar después de que entraran a la República Democrática del Congo procedían de Austria, China, los Estados Unidos e Israel (se enviaron solicitudes a los cuatro países para que determinaran el origen y, posteriormente, el Grupo recibió de Austria, los Estados Unidos e Israel respuestas que se referían directamente a la solicitud). Igualmente, en su informe de noviembre de 2017 (S/2017/979, anexo 1), el Grupo documentó el examen de armas incautadas por la UNMISS en julio de 2016, doce de las cuales tenían claras marcas que indicaban que habían sido fabricadas en China, además de una gran variedad de municiones fabricadas en China. Más recientemente, el Grupo recibió una muestra de tres cartuchos recogidos tras una emboscada que había tenido lugar en Mitika, cerca de Yei en Ecuatoria Central, aproximadamente el 23 de enero de 2018. Dos de ellos indicaban que habían sido fabricados en China y el tercero en Bulgaria.

al Grupo … a que lleve a cabo su labor de conformidad con el mandato de las resoluciones y de manera justa y objetiva".

78. El Grupo desea poner de relieve que no hay pruebas de que, después del envío que hizo la China North Industries Corporation (Norinco) en junio de 2014, fabricantes chinos hayan vendido directamente armas a Sudán del Sur[128]. Sin embargo, el Grupo ha recibido información que indica que siguen entrando al país armas y municiones por diversas rutas en África oriental[129]. Se sostiene que las municiones se transfieren ilícitamente y los distribuidores entregan existencias viejas (gran cantidad de las municiones inspeccionadas habían sido fabricadas en los años setenta) con certificaciones que no indican con exactitud el usuario final[130]. Ello es compatible con información que el Grupo recibió de fuentes en Juba según la cual la adquisición de armas para los servicios de seguridad tiene lugar en forma cada vez más clandestina y fuera de los cauces utilizados hasta 2015[131]. Numerosas fuentes, entre ellas observadores internacionales, señalaron que frecuentemente llegaban al Aeropuerto Internacional de Juba vuelos nocturnos y que probablemente se trataba del punto de entrada de suministros de armas al país[132]. Los mecanismos de adquisición para las fuerzas armadas del Gobierno son cada vez más opacos y numerosas fuentes indicaron que el Servicio de Seguridad Nacional ha pasado a ser el comprador más importante y frecuente de armas en Sudán del Sur[133].

79. En los casos en que el Grupo no puede obtener datos suficientes para rastrear el origen de armas y municiones encontradas en Sudán del Sur, se hace extremadamente difícil encontrar más detalles y, lo que es más importante, distinguir entre las armas y municiones que un Estado proveedor transfiere legalmente a Sudán del Sur y las que han sido transportadas ilícitamente. Si bien China no es el único país que no responde a las solicitudes de información formuladas por el Grupo, habida cuenta de la gran cantidad de armas y de municiones encontrados en Sudán del Sur que están vinculados con fabricantes chinos, el hecho de que no lo haga entraba la ejecución efectiva de su mandato de vigilar las corrientes de armas. Además, la falta de datos que sirvan para rastrear las armas y municiones constituye un gran obstáculo para la investigación de incidentes tales como el ataque en Bor y sigue redundando en desmedro de los intentos de vigilar la utilización ilícita de armas en el país.

---

[128] En el informe del Grupo de agosto de 2015 (S/2015/656) figuraba documentación acerca de este envío, cuya orden de compra indicaba, entre otras cosas, 20 millones de municiones de 7.62x39mm.

[129] El experto en armas discutió con el General Malong la cuestión de las adquisiciones de armas en Sudán del Sur en una reunión celebrada el 3 de febrero de 2018, en la que el ex Jefe de Estado Mayor del Ejército de Liberación Popular del Sudán manifestó que "es fácil conseguir armas". Indicó además que había fuentes disponibles en "Europa Oriental", si bien se negó a dar detalles más concretos. El Grupo ha verificado anteriormente transferencias de armas desde Ucrania, a saber 830 ametralladoras ligeras y 62 ametralladoras pesadas en 2014 y helicópteros de ataque MI-24 en 2015 (véase S/2016/270, párrs. 69 y 75) y no estáa claro si los comentarios de Malong se referían a esas transferencias o a otras.

[130] Tres fuentes independientes sostienen que se compran municiones a proveedores en Europa Oriental, que son enviadas a la región primero y a Sudán del Sur después. El Grupo tiene conocimiento de dos investigaciones en curso sobre esta cuestión, además de las suyas. Sin embargo, hasta la fecha no ha podido verificar independientemente estas afirmaciones.

[131] El Grupo ha pedido reiteradamente autorización para examinar armas del gobierno de Sudán del Sur y ha planteado la cuestión en persona y por escrito a altos funcionarios del país y a personal militar, más recientemente en una reunión con el Ministro de Defensa, Kuol Manyang Juuk, en octubre de 2017 y en una carta ulterior al gobierno. Hasta la fecha, el Grupo no ha recibido respuesta a estas solicitudes.

[132] Entrevistas realizadas en Juba en septiembre de 2017 y febrero de 2018.

[133] Entrevistas con tres fuentes confidenciales que tienen conocimiento directo de la adquisición de armamentos en Sudán del Sur (la fecha y el lugar son confidenciales).

Aviones de reacción L39 y helicópteros de ataque MI-24

80. Las operaciones con helicópteros MI-24 se han visto limitadas en el segundo semestre de 2017 y los primeros meses de 2018. Según informes, se utilizaron dos de esos helicópteros en forma coordinada con operaciones del Ejército de Liberación Popular del Sudán cerca de Maiwut en el Alto Nilo el 21 de julio de 2017. Con excepción de ese caso, sin embargo, el Grupo no tiene conocimiento de otras operaciones con helicópteros MI-24 que sean más recientes. Las fotografías tomadas por satélite de los MI-24 en el Aeropuerto Internacional de Juba que obtuvo el Grupo indican que prácticamente no se han movido en los últimos meses, lo que probablemente obedezca a la escasa disponibilidad de recursos para la revisión técnica y al reducido suministro de los cohetes que constituyen su principal armamento. Se informó al Grupo en febrero de 2018 de que el Gobierno estaba tratando de que se hiciera una revisión técnica de los helicópteros y de adquirir 400 cohetes S8 para reanudar las operaciones[134].

81. Los aviones de reacción L39 (a los que se ha hecho referencia en los informes del Grupo de septiembre de 2016 (S/2016/793) y abril de 2017(S/2017/326)) han permanecido igualmente inactivos durante gran parte del período a que se refiere este informe. Sin embargo, una fuente con conocimiento directo señaló que a principios de febrero de 2018 habían comenzado a efectuar vuelos de nuevo desde su base en Gulu (Uganda)[135]. Aproximadamente a las 00.20 horas del 8 de febrero, se observaron dos pequeños aviones de reacción que sobrevolaban Juba. Según un testigo experto, ninguno de los dos tenía luces de navegación y es probable que hayan sido los dos L39.

Suministro de armas a la oposición

82. Las entrevistas con los líderes de los principales grupos de oposición, sumadas a informes de operaciones sobre el terreno y a comentarios de observadores internacionales, corroboran la conclusión de que, a la época de presentación del presente informe, las fuerzas de oposición siguen teniendo un acceso reducido a armas y municiones procedentes del exterior. La falta de municiones, en particular, ha limitado las operaciones ofensivas de grupos de oposición en muchos lugares. Comandantes de estos grupos manifestaron que se veían cada vez más obligados a emplear tácticas de guerrilla en pequeña escala, que dependen de mantenerse en movimiento y de evitar enfrentamientos directos con fuerzas del gobierno[136].

VII. Cumplimiento de la congelación de activos y la prohibición de viaje

83. El Grupo ha seguido reuniendo, examinando y analizando información sobre lo que han hecho los Estados para llevar a la práctica la congelación de activos y la prohibición de viajar impuesta sobre las seis personas sancionadas el 1 de julio de 2015. Según el párrafo 12 de la resolución 2206 (2015) del Consejo de Seguridad, se entenderá por “activos” todos los fondos, otros activos financieros y recursos económicos que se encuentren en su territorio y que sean de propiedad o estén bajo el control directo o indirecto de las personas o entidades designadas por el Comité, de personas o entidades que actúen en su nombre o bajo su dirección o de entidades que sean de propiedad o estén bajo el control de ellas.

[134] Si bien no fue posible verificar independientemente esta afirmación, la fuente de ella tiene conocimiento directo de las operaciones con helicópteros y, por lo tanto, es digna de crédito.

[135] Entrevista en la región, febrero de 2018.

[136] Entrevistas en Addis Abeba, enero de 2018.

84. En el curso de sus investigaciones el Grupo recibió información según la cual Marial Chanuong Yol Mangok, una de las seis personas designadas, era el beneficiario de varias entidades comerciales registradas en Sudán del Sur a nombre de su hijo, Gum Marial Chanuong, que, a juicio del Grupo, actúa en nombre de Marial Chanuong Yol Mangok.

85. Según documentos obtenidos por el Grupo:

a) Al 30 de septiembre de 2013, Gum Marial Chanuong estaba registrado como uno de los directores de Gumach General Company Ltd[137] y tenía un 80% del capital de la empresa. El capital nominal en acciones de la empresa es de 100.000 dólares de los Estados Unidos. Habida cuenta de que las acciones se tienen en nombre de Marial Chanuong Yol Mangok[138], la parte que le corresponde ascendería a 80.000 dólares de los Estados Unidos;

b) Al 31 de agosto de 2012, Gum Marial Chanuong estaba registrado como uno de los directores de Half Moon Enterprises Ltd[139]. En el curso de sus investigaciones, el Grupo determinó que la parte que correspondía a Gum Marial Chanuong en el capital de la empresa era del 31%. Por lo tanto, la parte correspondiente a Marial Chanuong Yol Mangok sería también del 31%;

c) Al 7 de agosto de 2013, Gum Marial Chanuong estaba registrado como uno de los directores de Oxygen General Trading Company Ltd[140] y tenía un 50% del capital de la empresa. El capital nominal en acciones de la empresa es de 500.000 dólares de los Estados Unidos. El Grupo determinó que Gum Marial Chanuong es hijo de Marial Chanuong Yol Mangok, persona designada y que es el verdadero beneficiario del 50% de las acciones de la empresa.

86. El Grupo trató de ponerse en contacto con los abogados que habían actuado como testigos en el registro de Gumach General Company Ltd, Half Moon Enterprise y Oxygen General Trading Company Ltd. para obtener información acerca de si Gum Marial Chanuong seguía integrando el directorio de esas empresas, pero no ha tenido respuesta[141]. El Grupo seguirá investigando la propiedad de estas empresas.

87. Entre octubre y diciembre de 2017, el Grupo envió ocho cartas a bancos comerciales que operan en Sudán del Sur en que les solicitaba que proporcionaran información sobre empresas vinculadas con Marial Chanuong Yol Mangok que

[137] Memorándum y Convenio Constitutivo de Gumach General Company Ltd., con el abogado particular Phillips Anyang Ngong, miembro de Southern Sudan Associated Advocates, como testigo y registrado por el Ministerio de Justicia de Sudán del Sur el 30 de septiembre de 2013.

[138] Entrevista con una fuente del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición efectuada en noviembre de 2016 en Nairobi y reconfirmado en entrevistas con fuentes del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición efectuadas en Nairobi y Kampala en enero de 2018.

[139] Memorándum y Convenio Constitutivo de Half Moon Enterprises Ltd, con Kimo Ajing Aba Goc, consejero jurídico y ministro de fe, miembro del colegio de abogados, asesores jurídicos y ministros de fe, como testigo y registrado por el Ministerio de Justicia de Sudán del Sur el 31 de agosto de 2012.

[140] Memorándum y Convenio Constitutivo de Oxygen General Trading Co Ltd. con Kuethping Deng Nhumrom, abogado particular y ministro de fe, como testigo y registrado por el Ministerio de Justicia de Sudán del Sur el 7 de agosto de 2013.

[141] Correspondencia enviada a los abogados de Gumach General Company Ltd y Oxygen General Trading Company Ltd. el 9 de febrero de 2018 que se encuentra en los archivos del Grupo. Los documentos de registro de Half Moon Enterprises Ltd. no contenían información de contacto. Correspondencia enviada al Director de la Oficina de Registro de Empresas del Ministerio de Justicia de Sudán del Sur el 9 de marzo de 2018, que se encuentra en los archivos del Grupo.

tuvieran cuentas activas[142]. El 17 de octubre de 2017, el Grupo recibió una respuesta oficial del Equity Bank en que se indicaba que las cuentas de Planet Holdings Ltd, empresa mencionada en el informe provisional del Grupo, estaban congeladas. Sin embargo, la carta no indicaba concretamente en qué fechas se habían congelado.

88. Después de que el Banco Central de Kenya emitiera el 10 de octubre de 2017 una circular (véase S/2017/979, anexo III), por la cual se disponía que los directores ejecutivos de los bancos de ese país le presentaran para el 5 de noviembre de 2017 "un informe detallado sobre las cuentas de los seis generales y sobre los activos que fueran de su propiedad o estuviesen bajo su control directo o indirecto a través de otras personas", el Grupo le envió el 12 de febrero de 2018 una carta en que pedía que le indicara los nombres de los bancos de que se trataba, las fechas en que se habían congelado las cuentas, los fondos depositados en las cuentas y el historial de cada una a partir del 1 de julio de 2015. Hasta la fecha, sin embargo, el Grupo no ha recibido respuesta.

VIII. Conclusión

89. A juicio del Grupo, y a pesar de que la comunidad internacional exige que se establezca la paz en Sudán del Sur, el Gobierno y el ex Vicepresidente Primero Taban, en su intento por preservar sus intereses, han mantenido una política que ha contribuido en general a la extensión de la guerra. Ello quedó de manifiesto en el grado en que sus fuerzas han llevado a cabo operaciones de extrema brutalidad, han desplazado a civiles, han destruido los medios de vida de la gente y han obstruido el acceso humanitario a pesar de la existencia de un acuerdo firmado sobre la cesación de hostilidades.

90. El alcance de su impunidad y la prioridad que asignan a intereses privados por encima de la paz indican claramente que carecen de la voluntad política de que la haya a pesar de la terrible situación humanitaria en el país. Por lo tanto, no hay indicio alguno de que las partes en el conflicto, en particular el Gobierno, estén empeñadas en ponerle fin a menos que se impongan sanciones internacionales contra quienes actúan en contra de las gestiones de paz, cualquiera que sea el bando a que pertenezcan.

IX. Recomendaciones

91. El Grupo recomienda que:

a) Para demostrar que el Consejo de Seguridad está decidido a apoyar una paz inclusiva y sostenible en Sudán del Sur, el Comité designe a los responsables de los actos y las políticas que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Sudán del Sur, tal como se indica en los párrafos 9 y 10 de la resolución 2290 (2016). El Grupo, además del anexo confidencial que presentó al Comité en 2016, ha proporcionado pruebas en el presente informe e informes anteriores (S/2016/70, S/2016/793, S/2016/963, S/2017/326, S/2017/789 y S/2017/979) y le ha presentado también exposiciones concretas de casos relativos a varias personas responsables de los actos y las políticas descritos en el párrafo 9 de la resolución 2290 (2016) o cómplices en ellos, incluidos los responsables de las condiciones que han tenido como resultado una crisis humanitaria sin precedentes;

[142] El Grupo envió el 2 de octubre de 2017 solicitudes de información a Alpha Commercial Bank, Buffalo Commercial Bank, Chase Bank Kenya, Cooperative Bank of South Sudan, Equity Bank, International Commercial Bank, Ivory Bank y Nile Bank.

b) Para demostrar que el Consejo de Seguridad está decidido a apoyar una paz inclusiva y sostenible en Sudán del Sur y para impedir que sigan produciéndose las vulneraciones en gran escala de los derechos humanos que, según ha constatado el Grupo, guardan relación directa con el suministro de armas y municiones a agentes estatales y no estatales, el Consejo imponga un embargo sobre el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo a Sudán del Sur. El Grupo reitera sus recomendaciones relativas a las modalidades de la puesta en práctica de ese embargo que figuran en el párrafo 84 d), e) y g) de su informe provisional de 2015 (S/2015/656). A juicio del Grupo, un embargo de armas es técnicamente viable y tendría un efecto positivo en el entorno político y de seguridad;

c) A los efectos de que se siga cumpliendo con las designaciones existentes[143], el Comité envíe una carta a los Estados miembros de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en que les reitere las obligaciones que les impone el Artículo 41 del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas de cumplir la congelación de activos establecida en la resolución 2206 (2015) y ampliada en la resolución 2290 (2016) y pida específicamente que le comuniquen los activos y las cuentas bancarias de las siguientes personas y sus entidades afiliadas, previamente identificadas por el Grupo, que han de ser congeladas: Marial Chanuong Yol Mangok (Nyamlel Petroleum Company Limited, Global Services International Co Ltd, Planet Holdings Ltd y Ciec Trading Investment Company) y Gabriel Jok Riak (Zenith Company Limited).

[143] Véase https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/southsudan.xsl.

Anexos

Annex I
Table of correspondence sent and received by the Panel from 20 July 2017 to 14 March 2018

Country/other entity	*Number of letters sent*	*Requested information fully supplied*	*Information partially supplied*	*No answer*	*Pending*
Alfa Commercial Bank	1			1	
AUPSC	1			1	
Bulgaria	1	1			
Buffalo Commercial Bank	1			1	
Central Bank of Kenya	1			1	
Chase Bank	1			1	
China	1			1	
Cooperative Bank of South Sudan	1			1	
Deutsche Bank	4	1		3	
Equity Bank	1	1			
Ethiopia	2	1		1	
International commercial Bank	1	1			
Israel	1	1			
Ivory Bank	1				
National Bank of Abu-Dhabi	1	1			
Nile Bank	1			1	
Poland	2	2			
Qatar National Bank	1	1			
Southern Sudan Associated Advocates	1			1	
South Sudan	5			5	
Sudan	1			1	
Uganda	2	1		1	
Total	30	11		19	

Annex II
Conflict-related sexual violence

Conflict-related sexual violence remains a hallmark of the war in South Sudan, with women and girls bearing the brunt of this degrading practice.[1] All parties continue to deliberately use rape as part of their military strategy, often in gruesome incidents of gang rape. In his 2017 report, the Secretary-General pointed to "widespread and systematic sexual violence [being] used as a tactic of war to terrorize and persecute populations in a manner that indicates its ethnic, as well as political, undertones."[2] Research by Amnesty International indicates that "such extreme acts of sexual violence [are meant to] degrade, shame and humiliate both the victims and their ethnic or political group."[3]

UNMISS recorded 122 cases of conflict-related sexual violence impacting 196 victims, including 68 girls, in 2017. The incidents involved 88 cases of rape, 63 of gang-rape and 31 cases of abduction for the purpose of sexual assault. The SPLA or associated forces were deemed responsible in the vast majority of cases, i.e. in 72 cases, and SPLA-IO forces in 10 cases.[4] On the other hand, CTSAMM recorded 154 women and children seeking medical help for sexual violence, mainly rape by armed actors, in the Juba area alone between February and December 2017. The vast majority of cases would have been perpetrated by SPLA and other government security forces as the government controls most of the Juba area.[5] The full extent of conflict-related sexual violence across the country might never be known, as the overwhelming majority of violations go unreported.[6]

Survivors interviewed by Amnesty International described "a situation in which sexual violence is rampant, taking place any time civilians come into close proximity with armed actors." This includes during military attacks on villages, along roads and at checkpoints, and when abducted or detained.[7] This type of violence also persists nearby protection of civilian

[1] Conflict-related sexual violence is only one part of the story. Violence against women and girls (VAWG) is pervasive across South Sudan. In the first ever large-scale research study of VAWG in several areas of South Sudan (Juba, Bentiu PoC and Rumbek), 65% of women and girls reported experiencing physical and/or sexual violence in their lifetime, among the highest rates of VAWG in the world. Thirty-three% of women in these areas experienced sexual violence from a non-partner, often directly linked to a raid, displacement or abduction. Women and girls who live in Juba Protection of Civilian (PoC) sites are the most vulnerable to this type of assault—almost a quarter of women who experienced this violence reported that they experienced multiple incidents of sexual violence. See IRC. No Safe place: A life-time of violence for conflict-affected women and girls in South Sudan. November 2017. https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2294/southsudanlgsummaryreportonline.pdf.

[2] S/2017/249.

[3] Amnesty International. Do not remain silent: Survivors of sexual violence in South Sudan call for justice and reparations. July 2017. https://www.amnesty.org/en/documents/afr65/6469/2017/en/.

[4] Seven cases were attributed to Riek Machar allied IO forces, four to Taban Deng forces and four to IO allied militias. The remaining cases were either attributed to other security actors, e.g. South Sudan National Police Service, or the perpetrators remained unidentified. UNMISS pointed to difficulties in monitoring due to severely restricted humanitarian access to conflict zones under the control of either the Government or non-State armed groups and to lack of access to internally displaced and refugees for verification of incidents. Panel email correspondence with UNMISS. February 2018.

[5] CTSAMM recorded any type of sexual violence (broader definition than conflict-related sexual violence) but noted that the survivors mainly spoke of rape by "uniformed armed males". Remarkably these only pertain to cases where victims actually were able to seek medical help, indicating this number represents a mere fraction of the total number of cases. CTSAMM. SGBV in Central Equatoria. 15 January 2018. http://ctsamm.org/wp-content/uploads/2018/01/CTSAMM-REPORT-201803-SGBV-IN-CENTRAL-EQUATORIA.pdf.

[6] Victims often face severe psychological and physical trauma, fear reprisals and the social stigma linked to this type of violence, particularly male survivors. At the same time survivors and witnesses have limited access to life-saving services and reporting mechanisms.

[7] Amnesty International. Do not remain silent: Survivors of sexual violence in South Sudan call for justice and reparations. July 2017. Ibid.

sites, where armed actors prey on displaced women leaving the site to look for food or firewood or to access markets, raping them and stealing their goods. It often takes place alongside other violations of human rights laws, such as killing, torture, or mutilation.[8]

According to UNICEF, children account for approximately 25 per cent of all documented cases of conflict-related sexual violence in South Sudan. Communities consistently cite sexual violence as the greatest protection concern for women and girls. Given the severe food insecurity and worsening economy, women and girls have to walk further to forage for food and wood, placing them at even greater risk when carrying out the most basic acts of survival.[9] Child protection actors have raised a particular concern around girls associated with armed actors, often forced to cook, clean and provide sexual services. Those who were able to escape reported rape and other physical abuse.[10]

Survivors mostly feel unsafe reporting their experiences out of fear for reprisals, particularly if government security forces have been implicated.[11] Perpetrators act with full impunity, which has led to the normalisation of extreme levels of sexual violence. The Government has not taken any meaningful step towards ensuring accountability for these crimes in the past four years of civil war. The lack of willingness to take any action is demonstrated in the Juba area in particular which in spite of being under government control, experiences high levels of conflict-related sexual violence.

Beyond the impact on the individual victims and witnesses, conflict-related sexual violence leads to longer-term fissures within and between communities, inflaming inter-ethnic tensions and feeding cycles of violence.

[8] CTSAMM reported that women were mutilated in addition to being raped, with ears cut off and fingers removed. CTSAMM. SGBV in Central Equatoria. 15 January 2018. Ibid.

[9] UNICEF, Gender-based violence. December 2017. https://www.unicef.org/southsudan/GBV_Programme_Brief_December_2017_040218.pdf.

[10] Panel interviews with child protection actors in Nairobi, Juba and by phone, between September 2017 and February 2018. See also UNICEF, Gender-based violence. December 2017. Ibid.

[11] Panel interviews with protection actors in Nairobi, Juba and by phone, between September 2017 and February 2018. See also Amnesty International. Do not remain silent: Survivors of sexual violence in South Sudan call for justice and reparations. July 2017. Ibid.

Annex III
Response of First Vice-President Taban Deng Gai regarding recruitment of children by the Sudan People's Liberation Army in Opposition (Taban)

Mr. Klem Ryan
UN Panel of Experts
R.E: Recruitment of Children into the Army

First and foremost, the SPLA-IO forces under my command in Unity State and in the entire Republic of South Sudan does not have a policy to recruit any child or minor during 2016, 2017 and 2018 as alleged by the report. This report is based on hearsay and there is no concrete evidence to substantiate the claims.

In my career as an army officer during the twenty-one years of struggle, I have never had the policy to recruit any child or minor in my unit. In fact I have campaigned tirelessly to discourage the practice since I was a junior officer.

I have been a disciplined commander. I have protected children, women and the elderly and ensured that the soldiers under my command adhered to the strict observance of SPLA laws of no recruitment of children or minors to the Army. Additionally, as country we subscribe to international treaties which prohibit the recruitment of child soldiers and protect the rights of children.

I was in Yambio recently to demobilize children recruited by others from the army and succeeded in releasing over 2,000. It is the policy of the Government of the Republic of South Sudan to ensure children are safeguarded and protected and we have a police to not to recruit them into the army.

Thanks
H.E. Taban Deng Gai
First Vice President of the Republic of South Sudan
February 27, 2018

Annex IV
Obstruction of humanitarian access

In its examination of statistics compiled by the humanitarian community, the Panel notes that "humanitarian access incidents" have increased during the reporting period.[1] In 2017, humanitarians reported 1,159 humanitarian access incidents, significantly higher than 908 in 2016 and 909 in 2015, and the highest annual number of incidents since the conflict began in December 2013.[2] In 2016, 69% of those incidents involved violence against humanitarian personnel or assets, with 24 humanitarians killed.[3] In 2017, the number of incidents involving violence had decreased to 47%, however, 28 workers were killed,[4] including six aid workers killed in one single attack on Duk Payuel village, Jonglei, at the end of November 2017.[5]

In an apparent response to pressure from the international community to deal with obstruction of humanitarian assistance, President Salva Kiir issued the Republican Order for the "Free, unimpeded and unhindered of Humanitarian Assistance Convoys" on 9 November 2017.[6] However, the Panel assesses the situation has so far not significantly improved.

November 2017 was coincidentally one of the worst months for humanitarian actors since the start of the war in 2013, with 9 aid workers killed in attacks and 47 NGO staff evacuated in Eastern Equatoria, Jonglei and Unity.[7] In December 2017, 111 access incidents were reported,[8] compared to 77 in the same month one year earlier[9]. Strikingly, 44% of those incidents were attributed to state security forces in 2017,[10] compared to only 28% in 2016,[11] in spite of the clear order issued by their Commander-in-Chief, President Salva Kiir. In January 2018, a reduction in access incidents was noted (66) compared to December 2017, with 33 % of incidents attributed to state security forces. Two independent humanitarian sources suggested that the decrease in violent incidents may have been due to an overall decrease of active fighting across the country coupled with seasonal effects.[12]

---

[1] The humanitarian community keeps track of obstruction of humanitarian assistance through reporting "humanitarian access incidents" to OCHA. It should be noted that these reports only represent a fraction of the actual incidents occurring as a number of humanitarian actors choose not to report access-related incidents due to safety concerns for their beneficiaries and staff. For example, a June 2017 survey found that on average only one third of known cases of bureaucratic access impediments are reported to any entity. http://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/201711/SBureaucratic_Access_Impediments_Survey_Report.pdf.

[2] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_20180213_Annual_Access_Snapsh Final.pdf.

[3] https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-access-situation-snapshot-jan dec-2016.

[4] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS_180118_OCHA_SouthSudan_Humanitarian_Bulletin01.pdf.

[5] Six NGO workers were killed in a raid on Duk Payuel village at the end of November 2017. Reportedly, around 44 local people were killed and dozens wounded when assailants launched a coordinated attack the village. Houses and huts were destroyed in the attack and around 50 women and children were abducted. An NGO warehouse was looted and around 1,000 cattle were stolen. https://aidworkersecurity.org/incidents/search?start=2014&detail=1&country=SS.

[6] http://docs.southsudanngoforum.org/sites/default/files/2017-11/Order-Humanitarian%20assistance.pdf.

[7] USAID. South Sudan Crisis. Fact sheet 3. 16 January 2018. https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/01.16.18_-_USAID_DCHA_South_Sudan_Crisis_Fact_Sheet_3.pdf.

[8] https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-access-snapshot-december-2017.

[9] https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-access-situation-snapshot-december-2016.

[10] The remaining 56% is divided between non-state armed actors (25%); criminal or unknown (18%); civilians (7%); and national or sub-national governments (6%). https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-access-snapshot-december2017.

[11] The remaining 72% is attributed to other armed actors (29%); unknown (26%); and national or sub-national government (17%). https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-access-situation-snapshot-december-2016

[12] Panel interview, Nairobi, February 2018 and Panel email correspondence, February 2018.

Opposition armed groups also obstruct humanitarian assistance, albeit to a lesser degree. On 17 December 2017, the Riek Machar faction of the SPLM/A in Opposition abducted 6 humanitarians on the Raja-Wau road during armed clashes with the SPLA. They detained the 6 workers including one international and five national staff, for four days before handing them over to WFP on 20 December.[13]

[13] https://www.solidarites.org/en/press/security-incident-south-sudan-solidarites-international-calls upon-media-utmost-caution/; https://reliefweb.int/report/south-sudan/humanitarian-coordinator-gravely-concerned-over-six-missing-aid-workers-south; and https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-coordinator-welcomes-news-six-aid-workers-safely.

Annex V
Case study: Taxation at checkpoints

Armed groups, including the SPLA and the Machar faction of the SPLA-IO, continue to use checkpoints along South Sudan's roads to extract bribes—commonly referred to by armed groups as "transit taxes"—from private and commercial vehicles. Given the persistent lack of resupply for opposition armed groups and the inability of the central government to pay SPLA salaries, the transit tax is less a means of financing the conflict as it is basic means of survival for forces on both sides of the conflict.[1]

While SPLA-IO forces loyal to Riek Machar have lost significant ground to the SPLA in recent months, the SPLA-IO maintain control over a number of checkpoints where they have been collecting transit rates. SPLA-IO representatives told the Panel that the transit tax at IO checkpoints are in the range of $16-18 per vehicle and $14-18 per cattle herd. For trucks, the SPLA-IO calculates its tax on the basis of cargo weight. The funds collected are typically used to purchase daily necessary supplies to opposition fighters.[2] Estimates of cash flows from transit rates are difficult to make, as real figures are kept by SPLA-IO commanders on the ground.

SPLA checkpoints are mostly located along main transport routes, which increases opportunities to collect cash. Transit fees at SPLA checkpoints is in the range of 20-25 USD per track and of 3-5 USD for motorcycle. About USD 150-250 is collected per day.[3] The map below shows an approximate location of both parties' checkpoints (Figure III).

[1] The salary size for the private in SPLA is 600 SSP, which due to rampant inflation does not cover basic living costs for an individual soldier, much less provide for a family. Confirmed by a confidential source in UNMISS and a separate confidential source in New York in January 2018.

[2] Interviews with IO members in November 2017 and January 2018 in Nairobi and Kampala. Also confirmed with interviews independent analyst in November 2017 in Nairobi and in January 2018.

[3] Interviews with IO members in November 2017, January and February 2018 in Nairobi, Kampala and Khartoum. Also confirmed with interviews with independent analyst in November 2017 in Nairobi and in January 2018.

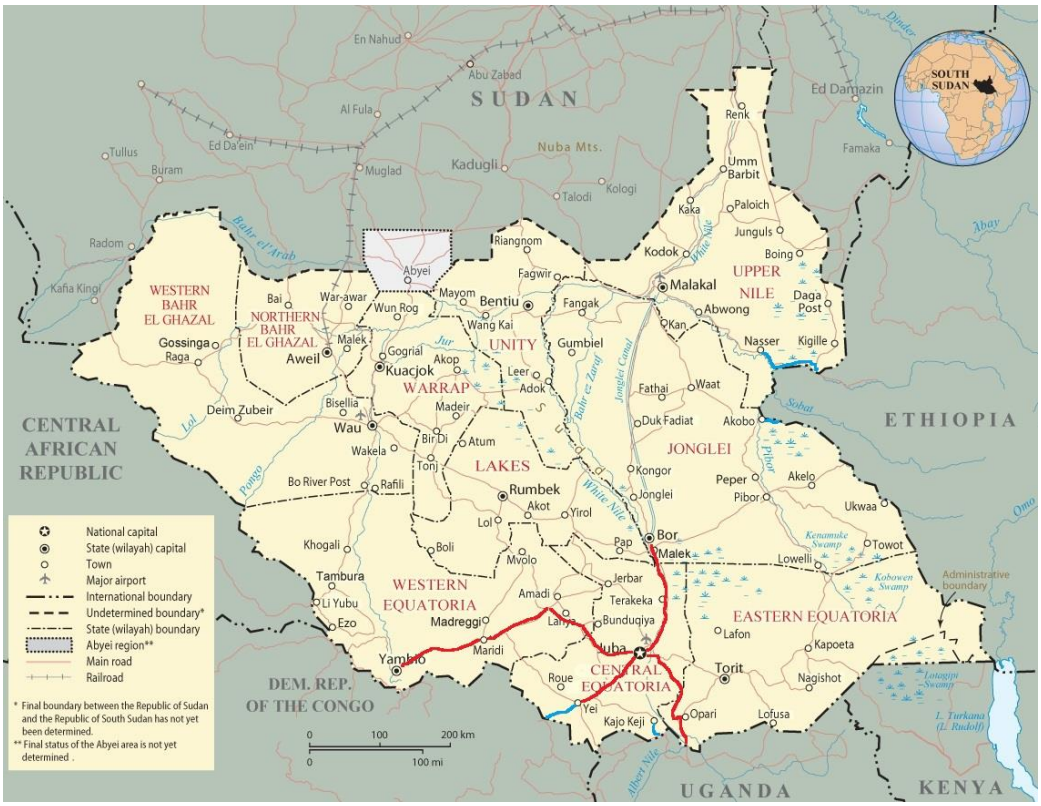


Figure III South Sudan Road map with SPLA (red) and SPLA-IO (blue) checkpoints on which Panel has data on transit taxation.

Annex VI
Case Study: Loka plantation

Background–A disputed plantation

The situation in Lainya County, Yei River State, is illustrative of the illegal exploitation of teak and armed groups' profit from the trade. The 1,775 hectare Loka plantation is the largest of three concessions in Yei River held by the Central Equatoria Teak Company (CETC), which signed a 32-year lease with the central government in 2009.[1] South Sudan has not adopted forestry legislation since its 2011 independence (the Forest Bill passed by parliament has been awaiting President Kiir's signature since June 2016), and the industry is still governed by pre-independence legal frameworks, which give the central government authority to grant forestry concessions in federal forests such as the Loka plantation.[2]

Owing to a variety of factors, including insecurity and illegal logging operations on the plantation, CETC did not commence felling trees in Loka until 2012. According to an official in the Ministry of Agriculture, Forestry, Cooperatives and Rural Development (MAFCRD), which until 2016 managed forestry operations in South Sudan (the Ministry of Environment and Forestry now holds this responsibility), the then Central Equatoria State (CES) government and local officials in Lainya County, frustrated by the lack of progress in exploiting the teak, moved in October 2012 to force CETC to abandon the concession and hand over its assets to community leaders.[3] In July 2014, following a nearly two-year dispute between CETC and local government officials, the CES Council of Ministers voted to take control of the concession and awarded a new concession to a company called Rubena Ladu, based in Yei with backing from investors in Dubai, United Arab Emirates.[4] The CES decision to nullify CETC's contract is illegal under current South Sudanese law, and CETC has been embroiled in a legal dispute with the CES and now Yei River State and national government to resume operations.[5]

Heightened conflict opens the door for illegal exploitation

When South Sudan's conflict expanded into the Equatorias in the fall of 2016, Yei and its surrounding areas, including Lainya County, experienced some of the worst atrocities against civilians, with the SPLA slaughtering Equatorian civilians and Equatorian militia responding by killing ethnic Dinkas in the area.[6] The resulting mass displacement from Yei River created an environment in which armed groups could exploit the teak for their own purposes. Loka plantation was and remains ground zero for these activities. With neither CETC nor Rubena Ladu conducting felling operations in Loka, Yei River State officials have sold logging permits and certificates of origin to individuals and newly incorporated small companies.[7]

Profits for armed groups

Many of these local actors have close ties—or are themselves members of—the SPLA or the SPLA-IO.[8] These operators pay the government to log a specific number of trees. In addition, they pay fees per tree to either the SPLA or the SPLA-IO, as discussed in the main body of this report. Industry experts estimate that approximately 80-100 trucks each carrying around 100 to 120 whole logs are extracted from Loka every month, amounting to approximately 6,000 cubic meters of wood.[9] Of those trucks, between 25 and 35 are exported directly to buyers in Kampala, Uganda and the rest or sent to sawmills in Juba

[1] Confidential document on file with the panel.
[2] For a detailed discussion of the legal and institutional frameworks for the forestry sector see UNREDD Country Needs Assessment for South Sudan (2015), pages 38-51.
[3] Interview with MAFCRD official in Juba, 11 February 2018.
[4] Confidential document on file with the panel.
[5] Interview with MAFCRD official in Juba, 9 February 2018 and interviews with teak industry officials in December 2017 and February 2018.
[6] There is extensive reporting on the fighting and atrocities in Yei River State. See the Panel's final report for 2016 (S/2017/326) and Patinkin, Jason, "The War in Equatoria: A rare look inside South Sudan's spreading conflict," IRIN, 12 July 2017.
[7] Interviews with teak traders in Kampala and correspondence with teak industry representatives in Nairobi and South Sudan, November 2017 and February 2018.
[8] Interviews with teak trader in Kampala, 9 February 2018, South Sudan forestry expert, 31 January 2018, and confidential IO source in Kampala, 18 February 2018.
[9] Interview with teak industry representative on 3 November 2017.

or Yei for milling and eventual export, again to Uganda.[10] According to SPLA-IO sources, the proceeds from trucks bound directly for Kampala often benefit the IO, while the profits from trees milled in Yei and Juba would benefit the SPLA or the SPLA-IO, depending on the political leanings of the mill operator.[11] Based on the protection fees cited in the main body of the report, the Panel estimates that the SPLA-IO nets $42,000 to $67,200 in protection money per month from the trucks bound directly for Kampala. The Panel has not yet been able to approximate the distribution of funds to armed groups from the trucks bound for Yei and Juba.

Lost revenue

During the course of its investigations, the Panel visited an international trading firm outside Kampala, Uganda and spoke with teak buyers there. Teak traders pay USD $7,000 to $8,000 per truckload of uncut teak from South Sudan, which for 80 to 100 trucks per month amounts to anywhere from $560,000-$800,000 paid to traders and middlemen. The logs are either loaded directly (Figure II) or milled with chainsaws and then loaded into containers. The containers are then loaded on to trucks and travel via road to Mombasa, Kenya for export—most frequently to buyers in from Middle East and Asia. Buyers in these countries pay anywhere from $500 to $1,000 per cubic meter of teak, depending on the size and quality of the trees or planks, putting the market value of the teak coming out of Loka each month at $3-6 million. Teak traders whom the Panel interviewed confirmed that the logs shown in Figures I and II are from Loka Plantation, and that traders expect the teak in the 20 foot container shown in Figure I to sell for $650-$700 per cubic meter, or $21,580 to $23,240.[12] Since the Central Equatoria State government pushed CETC off the concession, one industry expert estimates that 140,000 cubic meters of teak has been harvested, representing a market value of approximately $91 million and lost government revenue of approximately $14 million.[13]

Figure I Uncut teak logs loaded in a shipping container at a warehousing facility outside Kampala, Uganda.

[10] Correspondence with teak industry representative on 9 February 2018.
[11] Confidential interview with Kampala-based SPLA-IO member on 20 February 2018.
[12] Panel visit and interviews with teak traders at an international transit facility outside Kampala, Uganda, on 7 February 2018.
[13] Correspondence with teak industry representative on 20 February 2018.

Figure II Workers at a warehousing facility outside of Kampala cutting up uncut teak logs from South Sudan.

Annex VII
Letters to the Permanent Representative of China to the United Nations

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

POSTAL ADDRESS-ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS -ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK

REFERENCE: S/AC.57/2018/PE/OC.01

2 January 2018

Excellency,

I am writing on behalf of the Panel of Experts on South Sudan, whose mandate was established pursuant to Security Council resolution 2206 (2015) and extended pursuant to resolution 2353 (2017) until 31 May 2018. A copy of the letter of appointment of the Panel by the Secretary-General (S/2017/594) is attached herewith for ease of reference.

The Panel is mandated by the Security Council to, inter alia:

12 (c) Gather, examine and analyse information regarding the supply, sale or transfer of arms and related materiel and related military or other assistance, including through illicit trafficking networks, to individuals and entities undermining implementation of the [Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan] or participating in acts that violate international human rights law or international humanitarian law, as applicable.

On 17 April 2014, the UNMISS base in Bor was attacked and 48 South Sudanese civilians sheltering within the base were massacred. The Panel has shell casings from the ammunition used by the assailants. Ammunition tracing experts have identified these rounds as likely of Chinese manufacture. Furthermore, these experts have not previously documented some of these specific manufacture's head stamps in the region, suggesting that these rounds may have been issued to the attackers shortly prior to their use in April 2014. In this connection, please find attached (Annex) an image of the shell cases.

The Panel requests the assistance of the Chinese authorities in tracing the origin of these rounds in the hope that it can more accurately trace their distribution, thereby, identify the perpetrators of the massacre. In particular, the Panel would request assistance in tracing the specific manufacturer of the ammunition, and details of any export records of ammunition with these manufacturing marks to South Sudan.

His Excellency
Mr. LIU Jieyi
Permanent Representative of the People's Republic
of China to the United Nations
New York

2

I also take this opportunity to reiterate Panel's letter S/AC.57/2017/PE/OC.8 dated 2 February 2017 asking for your Government's assistance in tracing weapons in connection to the conflict in South Sudan. The Panel is yet to receive a written response to this request. I've attached the copies of the earlier letter for your ease of reference.

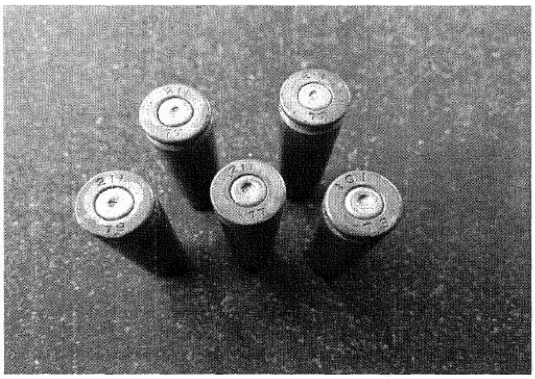
The Panel would sincerely appreciate if your office would direct its response **by 30 January 2018** through Mr. David Biggs, Senior Secretary of the Security Council Committee established pursuant to resolution 2206 (2015) concerning South Sudan: 2 UN Plaza, Fl 20, Room DC2-2042, United Nations, New York, NY 10017, Tel 212-963-5598, Fax 212-963-1300/3778, Email: biggs@un.org.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Klem Ryan
Coordinator and Arms Expert
Panel of Experts on South Sudan
extended pursuant to Security Council
resolution 2353 (2017)

3

ANNEX: Shell Cases from the massacre of civilians in the UNMISS base in Bor, South Sudan - Collected 17 April 2014.



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

POSTAL ADDRESS-ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS -ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK

REFERENCE: S/AC.57/2017/PE/OC.08

2 February 2017

Excellency,

I have the honour to write to you on behalf of the Panel of Experts on South Sudan established pursuant to Security Council resolution 2206 (2015), and extended by resolution 2290 (2016).

As you are aware, the Security Council has requested, inter alia, that the Panel "gather, examine and analyse information regarding the supply, sale or transfer of arms and related materiel and related military or other assistance, including through illicit trafficking networks, to individuals and entities undermining implementation of the Agreement or participating in acts that violate international human rights law or international humanitarian law, as applicable."

The Panel has recently received information on the weapons collected by the UN peacekeeping mission in the Democratic Republic of Congo (MONUSCO) from the supporters of Riek Machar, ex-Vice President of South Sudan, after their crossing into DRC in August 2016. Among the weapons documented were a number apparently manufactured in the People's Republic of China. I have attached the weapon specifications and serial numbers to this letter for your reference

The Panel would appreciate your support in obtaining from the listed companies any information about their manufacture, purchase and shipment so that we can ascertain if these weapons have been legitimately procured by the government of South Sudan, and subsequently taken by Machar's armed supporters from government stocks, or have been brought into South Sudan by other means contrary to their intended use in accordance with the End User Certification.

The Panel therefore requests the shipping and End User documentation for the transactions involving these weapons and any other information that will assist the Panel in its investigation of this matter.

His Excellency
Mr. Liu Jieyi
Permanent Representative of the People's Republic of China
to the United Nations
New York

2

On behalf of the Panel, I would like to reiterate our thanks to the Government of the People's Republic of China for its ongoing cooperation as we work to fulfill the mandate entrusted to us by the Security Council.

The Panel would sincerely appreciate if your office would kindly direct its response through Mr. David Biggs **by 28 February 2017**, Secretary of the Security Council Committee established pursuant to resolution 2206 (2015) concerning South Sudan: 2 UN Plaza, Fl 20, Room DC2-2042, United Nations, New York, NY 10017, Tel 212-963-5598, Fax 2121-963-1300/3778, Email: biggs@un.org.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Payton Knopf
Coordinator and Regional Expert
Panel of Experts on South Sudan
extended pursuant to Security Council
resolution 2290 (2016)

3

Attachment

Weapon Type	Model	Serial Number	Possible Manufacturer
Automatic Rifle	CQ M-311	24004410	Norinco
Automatic Rifle	Type 56-2	2851588	State Factory 386
Automatic Rifle	Type 56-1	58012047	State Factory 26
Automatic Rifle	Type 56-1	28128214	State Factory 26
Automatic Rifle	Type 56-1	24000890	State Factory 56
Grenade Launcher	RPG7	740862	State Factory 4702
Grenade Launcher	RPG7	2001439	State Factory 197

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

POSTAL ADDRESS-ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS -ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK

REFERENCE: S/AC.57/2017/PE/OC.08

2 February 2017

Excellency,

I have the honour to write to you on behalf of the Panel of Experts on South Sudan established pursuant to Security Council resolution 2206 (2015), and extended by resolution 2290 (2016).

As you are aware, the Security Council has requested, inter alia, that the Panel "gather, examine and analyse information regarding the supply, sale or transfer of arms and related materiel and related military or other assistance, including through illicit trafficking networks, to individuals and entities undermining implementation of the Agreement or participating in acts that violate international human rights law or international humanitarian law, as applicable."

The Panel has recently received information on the weapons collected by the UN peacekeeping mission in the Democratic Republic of Congo (MONUSCO) from the supporters of Riek Machar, ex-Vice President of South Sudan, after their crossing into DRC in August 2016. Among the weapons documented were a number apparently manufactured in the People's Republic of China. I have attached the weapon specifications and serial numbers to this letter for your reference

The Panel would appreciate your support in obtaining from the listed companies any information about their manufacture, purchase and shipment so that we can ascertain if these weapons have been legitimately procured by the government of South Sudan, and subsequently taken by Machar's armed supporters from government stocks, or have been brought into South Sudan by other means contrary to their intended use in accordance with the End User Certification.

The Panel therefore requests the shipping and End User documentation for the transactions involving these weapons and any other information that will assist the Panel in its investigation of this matter.

His Excellency
Mr. Liu Jieyi
Permanent Representative of the People's Republic of China
to the United Nations
New York

2

On behalf of the Panel, I would like to reiterate our thanks to the Government of the People's Republic of China for its ongoing cooperation as we work to fulfill the mandate entrusted to us by the Security Council.

The Panel would sincerely appreciate if your office would kindly direct its response through Mr. David Biggs **by 28 February 2017**, Secretary of the Security Council Committee established pursuant to resolution 2206 (2015) concerning South Sudan: 2 UN Plaza, Fl 20, Room DC2-2042, United Nations, New York, NY 10017, Tel 212-963-5598, Fax 2121-963-1300/3778, Email: biggs@un.org.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Payton Knopf
Coordinator and Regional Expert
Panel of Experts on South Sudan
extended pursuant to Security Council
resolution 2290 (2016)

Attachment

Weapon Type	Model	Serial Number	Possible Manufacturer
Automatic Rifle	CQ M-311	24004410	Norinco
Automatic Rifle	Type 56-2	2851588	State Factory 386
Automatic Rifle	Type 56-1	58012047	State Factory 26
Automatic Rifle	Type 56-1	28128214	State Factory 26
Automatic Rifle	Type 56-1	24000890	State Factory 56
Grenade Launcher	RPG7	740862	State Factory 4702
Grenade Launcher	RPG7	2001439	State Factory 197